

alaisse

JUNIO 2023

una isla de ideas en un océano de algoritmos

DEMOCRACIA
EXPUESTA





Número 556

Junio 2023

Año 47, tercera época

Ilustración de portada: **Kalia León**

Dirección de arte: **Kael Abello y Ricardo Vaz - Utopix**

Diseño gráfico y collages: **Kael Abello - Utopix**

Diagramación y montaje: **América Latina Rodríguez - Utopix**

Ilustraciones: **Deisa Tremarias (P. 8-15), César Mosquera (P. 54-61)**

Valentina Aguirre (P. 64-65) - Utopix

Director editorial:

Oswaldo León

Directora ejecutiva:

Sally Burch

Colectivo editorial:

Lautaro Rivara

Gabriel Vera Lopes

María Aprigliano

Gerardo Gamarra

Gerardo Szalkowicz

Débora Jeanette Arce Sposito

Roxana Baspineiro

Mariano Dubin

ALAI es una organización orientada a la democratización de la comunicación, la promoción de la integración regional y el acompañamiento de los movimientos sociales. Dedicada al análisis crítico del acontecer regional y global, su revista se publica desde hace más de cuatro décadas y se edita desde el año 2021 en Argentina.

Sede en Argentina: Talcahuano 57, 1° piso, dpto. 6. Buenos Aires.

Sede en Ecuador: Av. 12 de Octubre N18-24 y Patria, Of. 503, Quito.

Contacto: <https://www.alai.info/contacto/>

Aportes: <https://www.alai.info/colabora/>

Los contenidos de esta revista pueden ser reproducidos a condición de que se cite la respectiva fuente.

Contenido

DEMOCRACIA EXPUESTA

Colectivo editorial ALAI

P. 5

LA «NACIÓN EXISTENCIAL» Y SUS ENEMIGOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

Matías Bosch Carcuro y Elvin Calcaño Ortiz

P. 9

BRASIL: BOLSONARISMO Y AUTOFAGIA

Gabriel Vera Lopes

P. 17

NAYIB BUKELE, LA LEY DE LA EXCEPCIÓN

Juan Manuel Erazo

P. 25

PERÚ: CRISIS, DICTADURA Y DESPERTAR CONSTITUYENTE

Lucía Alvites

P. 31

EL CHILE QUE (TODAVÍA) NO FUE: RETROSPECTIVA SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE

Héctor Testa Ferreira

P. 38

HAITÍ, EN SU EXTREMO LÍMITE

Federico Barreña

P. 47

MÁS COLABORACIÓN, MENOS CONFRONTACIÓN

Noam Chomsky y Vijay Prashad

P. 55

LA LENGUA MARYSE CONDÉ: SOBRE «CORAZÓN QUE RÍE, CORAZÓN QUE LLORA»

Giordana García Sojo

P. 63

¿QUÉ TAN LEJOS ESTÁN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LAS ESTRELLAS?

Daniel Vizúete-Sandoval

P. 67

MÁSCARAS GUARANÍES QUE USAMOS TODOS LOS DÍAS

Mariano Dubin

P. 77

EN ESTE NÚMERO

P. 84

Democracia expuesta

Por **Colectivo editorial ALAI**

Toda democracia nace de una dictadura o de la guerra. Y sería muy difícil, cuando no imposible, abordar este fenómeno sin hablar de las muy diferentes definiciones que el hecho democrático ha adoptado en las últimas décadas en América Latina y el Caribe, en procesos que no siempre fueron simultáneos, y que jamás fueron idénticos. Tras el Plan Cóndor y las doctrinas contrainsurgentes de la guerra sucia, consumada la demolición del Muro de Berlín, y en la tierra arrasada de las políticas de ajuste estructural, la democracia fue en algunos casos recuperada como conquista, mientras que en otros sitios fue rehabilitada como mera concesión, desbaratados ya los proyectos de liberación social, nacional y continental que supieron asediarla por izquierda.

Sin embargo, los estallidos sociales antineoliberales, la emergencia y consolidación de los nuevos movimientos populares, y la ola de gobiernos progresistas y de izquierda que fueron cubriendo la región –un fenómeno sin parangón a nivel global– comenzaron a disputar y apellidar una democracia que se volvió, según el caso, popular, participativa, directa, protagónica, asamblearia, constituyente o plebiscitaria. La práctica de una democracia radicalmente definida alcanzó sus más elevadas cumbres en los ciclos político-constituyentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador, cuando movimientos y liderazgos emergentes la tensionaron hasta arrancarla de sus estrechos moldes demo-liberales.

Pero mucha agua corrió bajo ese puente. La democracia latinoamericana y caribeña no atraviesa hoy su mejor momento, y su estado de salud es cuando menos precario. Pero el debate comienza cuando dejamos de lado un diagnóstico compartido y pasamos a preguntarnos sobre las causas de la enfermedad, sobre la debilidad de los anticuerpos y sobre el origen de los “agentes patógenos”.

La democracia aparece en nuestra región expuesta en su doble sentido. Para los optimistas, expuesta en sus limitaciones formales, algo desconcertada frente al *sorpasso* ultraconservador, asediada desde afuera, mal ponderada, incomprensible, pero aún recuperable. ¿Su principal argumento? La «segunda ola progresista» que cubre, sin importar la intensidad de su color, buena parte del mapa continental. Para los pesimistas, la democracia aparece también expuesta, pero como una fractura, con sus huesos completamente rotos y tendidos a la intemperie. ¿Su principal argumento? Que los golpes y tentativas de golpe hace tiempo dejaron de ser la excepción para reconfirmarse como regla, y que las ultraderechas, antes marginales, hoy son ganadoras seguras o al menos muy dignas contrincantes electorales en la casi totalidad de nuestros países.



DEMOCRACIA EXPUESTA

La línea rectora de nuestra revista (la democracia) se abre en un haz de subtemas: el vigor relativo de cada una de nuestras post-dictaduras y post-conflictos; los procesos electorales en tiempos de dictadura algorítmica; los golpes de Estado de nuevo tipo; la emergencia de nuevas derechas y de nuevos ideologemas reaccionarios; la decrepitud de los partidos y la popularidad de los *outsiders*; la definición agónica de renovados "enemigos existenciales", ya sean reales o imaginarios; las movilizaciones regenerativas de corte antineoliberal o popular-democrático; las esperanzas de nuevas refundaciones constitucionales; los nuevos –y en algunos casos vacilantes– gobiernos progresistas; y las oportunidades y constreñimientos que ofrecen las salidas (meramente) electorales.

Sospechamos que las miradas aisladas o cortoplacistas impiden dar una mirada del conjunto, y no permiten llegar al balance acertado. Por eso elegimos los casos testigos de Brasil, Chile, El Salvador, Perú y República Dominicana, que no solo buscan ser representativos de América Latina y el Caribe, sino que permiten cotejar el vigor relativo de cada uno de nuestros ciclos democráticos respectivos, colocándolos en cada caso en la balanza del debe y el haber.

En este escenario, y detrás de una democracia que aparece fuera de quicio, reducida a su mera expresión formal, agonizante de burocracia y de retórica, cada país se ve acosado por sus propios fantasmas, que regresan como los síntomas mal reprimidos: el trujillato, el racismo y el nacionalismo hispanista en República Dominicana; la dictadura de Alberto Fujimori y la perdurable construcción de un enemigo interno; el nunca consumado post-pinochetismo chileno y el eterno retorno de la Concertación; el truculento viaje que lleva del terrorismo de Estado al terror de las maras y el estado de excepción en El Salvador; y las viejas y eventuales nuevas amnistías en un Brasil que supo ofrecer garantías para la impunidad.

Como primera síntesis de este ensayo de interpretación, y como antesala de la revista que nos ocupa, varias preguntas urgentes se nos imponen: ¿la democracia se está muriendo de odio o de hambre? ¿El trabajo de zapa corre a cuenta de los discursos intolerantes o más bien de la dura e inflexible economía política? ¿Cuánto explican las matrices de opinión y las *fake news* y cuánto los sostenidos índices de precariedad, exclusión, desigualdad, pobreza y hambre? ¿Qué alimenta las bajas pasiones que canalizan de manera invariable las nuevas fuerzas reaccionarias? ¿Los enemigos de la democracia son puramente externos o campeon también en las propias filas progresistas? ¿Todo es ceguera e irracionalismo o hay elementos lógicos de identificación positiva entre líderes y masas ultraconservadoras? ¿La democracia se defiende "con más democracia" como se suele repetir, o la frase no revela acaso más que la completa ausencia de estrategia e inventiva?

Ante todas estas preguntas irresueltas, creemos que algo es seguro: ni la moderación ni los buenos modales parecen estar reanimando a la víctima, ni la geopolítica global pareciera traer consigo aires vivificantes. ¿Podrá la democracia conquistar una sobrevivencia? ¿Volverá a ofrecer más que quimeras? ➤



La «nación existencial» y sus enemigos en República Dominicana

República Dominicana cuenta con la que probablemente sea la ultraderecha más hegemónica y asfixiante de toda la región, la que ha sido capaz de colonizar con su agenda a casi todo el espectro político. Sin embargo, su caso ha pasado curiosamente desapercibido en América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el secreto de su temprano y fulgurante éxito? ¿Y por qué ha hecho de migrantes y feministas sus «enemigos existenciales»?

Por **Matías Bosch Caruro** y **Elvin Calcaño Ortiz**

LAS DERECHAS HISTÓRICAS

Partimos de caracterizar como ultraderecha a los sectores que se ubican a la derecha del espacio de la centroderecha tradicional. Los cuales, en el contexto de las configuraciones sociales actuales, asumen la lucha política como terreno de disputas existenciales y batallas culturales contra un enemigo “progresista” o “comunista” que amenazaría valores esenciales vinculados a la nación, la familia, Dios y el sistema económico. Estos

grupos, en el plano ideológico, son herederos de dos corrientes que se han entrecruzado históricamente: la del liberal-conservadurismo y la del fascismo antisocialista. En el primer caso se trata de lo que, desde las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y principios del XIX, podemos caracterizar como ideología conservadora: aquella que contrapone, frente a los cambios, la defensa de “valores tradicionales” que dan continuidad a la sociedad a través del núcleo familiar y los nexos institucionales.

Este conservadurismo se articuló luego al propietarismo capitalista, dando paso a la ideología liberal-libertaria, que privilegia la propiedad privada como fundamento de la sociedad (Rodríguez Guerra, 1998). De ahí el surgimiento del liberal-conservadurismo, que asumió el marco teórico del liberalismo económico del siglo XIX, al considerar la libertad como una cuestión fundamentalmente económica, entendiendo al ser humano como un actor esencialmente económico que, en base al cálculo utilitario, tomaría decisiones en todas las esferas de la vida. El individualismo metodológico es, a su vez, el fundamento epistemológico de esta concepción articuladora del liberalismo y el conservadurismo, según la cual la sociedad debe ser entendida a partir de las acciones y sujetos individuales.

Esta forma de liberalismo articulado al conservadurismo defiende la libertad empresarial en tanto la más concreta manifestación de la acción individual, y proclama los derechos de propiedad como aquellos que debe garantizar un Estado reducido a su mínima expresión. En esta visión, un Estado fuerte limitaría las libertades, definidas en términos negativos como libertades económicas. Por eso, cuando surgen las crisis, es ese mismo Estado el que debe intervenir para “contener” a los sujetos y grupos que amenazan tales derechos de propiedad. De ahí la articulación entre liberal-conservadurismo y fascismo en sus diferentes variantes históricas.

Así llegamos al segundo elemento: el fascismo antisocialista. El fascismo, surgido a principios del siglo XX en la Europa de entreguerras, fue la reacción de una parte de las élites capitalistas ante el avance

socialista/comunista. Las clases dirigentes, en aras de garantizar sus derechos de propiedad, abrazaron un marco ideológico que proponía la uniformización de la nación y la eliminación física de toda amenaza a los valores tradicionales. El fascismo fue, en aquel contexto, el garante de los derechos de propiedad (privada) a través del aparato coercitivo del Estado, en tiempos en los que socialistas y comunistas proponían precisamente otras maneras de organizar los Estados y las economías.

En síntesis, las ultraderechas son herederas de una tradición política que, en tiempos de crisis de hegemonía, enarbola el anticomunismo –o el antiizquierdismo en general– en defensa del capitalismo propietario a ultranza, articulando la libertad negativa liberal con el reaccionarismo uniformizante y marcial. Por eso, en esta crisis que hoy vivimos, las ultraderechas resurgen para consumir una suerte de reposicionamiento neofascista que vuelve a ser la alternativa de una parte de las élites para garantizar, en lo económico, sus derechos de propiedad empresarial; y en el plano de la lucha político-ideológica, la centralidad de partidos y movimientos de signo (neo)conservador.

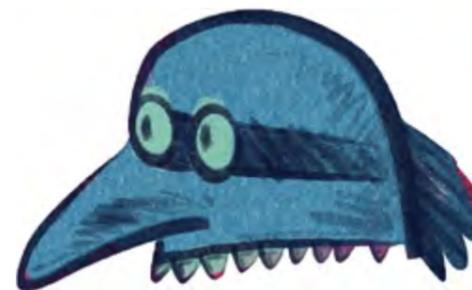
DESPOLITIZACIÓN Y RACIONALIDAD NEOLIBERAL

En los últimos 30 o 40 años, el avance arrollador del neoliberalismo generó las condiciones de posibilidad para que la lógica política de ultraderecha avance tan decisivamente. La “racionalidad neoliberal” (Foucault, 2007; Brown, 2016) crea las condiciones para que esta lógica se expanda, a través de dos

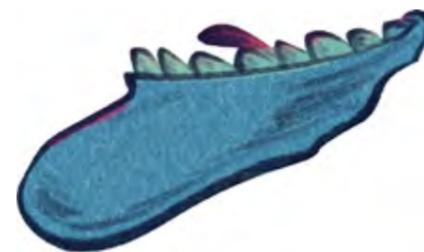
de sus operaciones características: la economización de la política, y la desvinculación de la libertad de sus fundamentos políticos. En el neoliberalismo, la economía se constituye en el único ámbito dice la verdad al ciudadano común (Villacañas, 2020). La política, así, pierde capacidad de “veridicción” y con ello de establecer gramáticas sociales que prioricen lo colectivo.

Bajo la hegemonía de la racionalidad neoliberal lo que ha ido quedando son sociedades debilitadas en su capacidad de acción colectiva. Mientras que los Estados, en tanto máxima expresión de esta lógica, se ven reducidos al rol de garantes de los derechos de propiedad empresarial, o como gestores de lo –poco– que queda de lo público. De ahí el énfasis actual, por parte de los organismos internacionales y de cierta academia, en el dispositivo ideológico de la «gobernanza», entendida como sinónimo de buena gestión pública: los Estados deben funcionar como empresas que protegen la utilidad empresarial de grupos económicos concentrados que son los que –nos dicen– crean empleo.

Cuando política y Estado se dedican sólo –o mayormente– a garantizar los beneficios privados de grupos muy reducidos, el ciudadano comienza a entender que no necesita de lo público para organizar su vida y que esto puede incluso volverse un obstáculo. Bajo el neoliberalismo la economía se desprende de todo sentido público, es decir, se desresponsabiliza; es este paradigma el que acaba por colonizar la política. Por otro lado, si la libertad se desvincula de sus fundamentos políticos, queda reducida a una serie de garantías de libertad individual



Lo que las ultraderechas han hecho es fundamentalmente dotar de un lenguaje político a este malestar social, ubicándolo en un universo de sentido y dotándolo de una conducción política



frente al Estado en su sentido coercitivo. La libertad ya no es definida como la posibilidad de ser materialmente libre sino que la libertad negativa se vuelve el elemento normativo. Y si “ser libre” es vivir sin la coerción de un Estado que no se responsabiliza de las consecuencias de su no intervención, lo que queda al individuo es una esfera privada que domina todos los ámbitos de su existencia. El liberalismo político creó las instituciones liberales que hoy conocemos; lo hizo concibiendo a la libertad como una cuestión política y colocando a la igualdad –en su dimensión formal– como horizonte normativo. Pero el liberalismo económico subvirtió eso al definir a la libertad como algo estrictamente económico (Calcaño, 2021).

A su vez, la desvinculación de los Estados de sus responsabilidades propició un capitalismo sin anclaje social (Piketty, 2019), generador de crecientes desigualdades y desequilibrios sociales. En ese contexto, el malestar se vuelve un elemento políticamente estructurante. Lo que las ultraderechas han hecho es fundamentalmente dotar de un lenguaje político a este malestar social, ubicándolo en un universo de sentido y dotándolo de una conducción política.

Las millones de víctimas del capitalismo neoliberal-financiero buscan hoy nuevas identidades colectivas. Intentan inscribir su malestar en un orden que les ayude a interpretar la precariedad y las derrotas vitales de lo cotidiano. Así, la ultraderecha logra capitalizar este malestar explicando de manera sencilla los problemas generales. Aquí se vuelve central la lógica de amigo-enemigo que aplican. Frente a mayorías pauperizadas que descreen de las instituciones públicas –pues estas no les resuelven nada en concreto– el ultraderechismo propone la expulsión de los enemigos de la comunidad. De ahí la centralidad que adquiere lo existencial en la política actual; la preeminencia de una disputa contra enemigos irreconciliables que no pueden ser admitidos dentro del cuerpo social.

El enemigo definido en clave ultraderechista es aquel cuya existencia conecta, de manera real o aparente, con los problemas cotidianos de la gente común. A nivel discursivo se coloca a todos –izquierdas de corte socialista o progresismos globalizantes– en el mismo saco: aquellos serían parte de una agenda global que ha destruido las economías nacionales y que apunta a acabar con la familia y los valores tradicionales. Los primeros –los izquierdistas– por adherir a un enfoque marxista, una suerte de plaga destructora que atenta contra la propiedad privada y el curso normal de la reproducción social capitalista, y que persiste en la lucha de clases, factor de debilitamiento de la sacrosanta nación (existencial). Los segundos –globalistas progresistas– representan la validación de una agenda global que va contra los fundamentos nacionales y religiosos. En este grupo se ubicarían tanto progresistas de

corte izquierdista como neoliberales antiizquierdistas al estilo Barack Obama, o los partidos de la centroizquierda moderada de la región.

El paradigma comunicativo que imponen internet y las redes sociales potencia este tipo de lucha existencial, porque permite trasladar la molestia ciudadana a los espacios de discusión de manera directa, creando condiciones para que el desprecio y el odio circulen con mayor facilidad e inmediatez. Cualquier ciudadano molesto que haya aceptado el marco ultraderechista puede convertirse, si se viraliza, en un referente de opinión, esto es, en una suerte de intelectual orgánico del siglo XXI. Opinadores de ultraderecha con habilidades comunicativas y recursos para montar podcasts, canales de YouTube y perfiles de Twitter hoy son tendencialmente decisivos en muchos países.

Cualquier contenido que circule y valide prejuicios, miedos y odios preestablecidos, adquiere carácter de verdad sin necesidad de contraste ni verificación, lo que se ve reforzado por la lógica de los algoritmos. Las empresas matrices detrás de Facebook, Twitter o Instagram saben de las *fake news* que se propagan de manera organizada en sus plataformas, pero hacen poco o nada para establecer controles que podrían reducir sus márgenes de ganancia. Antes bien, facilitan que los datos sobre sus usuarios sean aprovechados por empresas dedicadas a la manipulación del comportamiento electoral, a través de sofisticadas técnicas de inteligencia artificial y neuromarketing (véase por ejemplo el caso de la compañía Cambridge Analytica con el Brexit en Inglaterra, o el triunfo de Trump en Estados Unidos en las elecciones de 2016).

Detrás de este accionar de las grandes compañías tecnológicas se encuentra, precisamente, la racionalidad neoliberal. En primer lugar, porque su propio poder se debe al marco desregulatorio creado en los años 80 por las políticas de la contrarrevolución conservadora del eje Reagan-Thatcher. En segundo lugar, porque la narrativa neoliberal de la libertad empresarial brinda el marco justificativo para desarrollar prácticas antidemocráticas, sin que las instituciones públicas gocen del suficiente consenso social para ponerles límites efectivos (Zuboff, 2020).

Mientras nuestras sociedades se vuelcan hacia el reaccionarismo, se discute poco en torno a lo que realmente estructura la sociedad, como la distribución de la renta y los privilegios de minorías adineradas

La racionalidad neoliberal supone una amenaza a la democracia, porque genera las condiciones de posibilidad para el contraataque reaccionario de las ultraderechas. Por su parte, los proyectos políticos históricamente comprometidos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores mayoritarios se vuelven cada vez más irrelevantes, en la medida en que no logran explicarse en los términos que impone la sociedad neoliberal.

Mientras nuestras sociedades se vuelcan hacia el reaccionarismo, se discute poco en torno a lo que realmente estructura la sociedad,



como la distribución de la renta y los privilegios de minorías adineradas; o, a nivel del sistema-mundo, sobre el lugar dependiente que ocupan los países periféricos en las nuevas relaciones capitalistas globales. Tampoco se debate con la centralidad debida sobre amenazas existenciales reales como el cambio climático y sus consecuencias nefastas para la vida en el planeta.

EL «ENEMIGO EXTRANJERO»: LA MIGRACIÓN HAITIANA

Hay dos temas protagónicos en la opinión pública dominicana que ejemplifican la derechización creciente del sentido común en nuestro país: la migración haitiana y las tres causales de aborto. El enfoque ideológico con el que se abordan estas problemáticas de amplio interés nacional, así como los marcos de sentido sociales y mediáticos, evidencian una decisiva penetración de la lógica política de ultraderecha.

Debemos partir de que la desideologización sistemática de nuestra sociedad es un hecho demostrable a través de sus partidos políticos mayoritarios, los cuales comparten el mismo encuadre neoliberal. Además, las élites del poder económico gozan de una posición dominante que casi no encuentra contrapesos. Bajo esta correlación se ha justificado la despolitización en clave de racionalidad neoliberal, a través de la narrativa del desarrollo, modernización y crecimiento de un país –el «Nueva York chiquito», como fue risueñamente llamado– que sigue teniendo la peor educación de la región y el tercer salario mínimo más bajo del continente. El bloque histórico en el poder

La narrativa que se ha impuesto entiende a la migración haitiana en clave de amenaza existencial a la patria, y la relaciona con supuestas agendas globales que buscarían la disolución de la nación dominicana

articula una dominación cultural (en la sociedad civil) con la dirección política (del Estado), configurando una hegemonía casi absoluta. Es en este marco que la ultraderecha se constituyó en el principal actor ideológico del país.

Abordemos primero la migración haitiana. República Dominicana comparte isla y frontera con Haití, siendo esta última la nación más pobre del hemisferio occidental. El país, a su vez, vive desde hace años un proceso de desmontaje estatal, profundizado con el despliegue de bandas criminales que controlan importantes territorios, y por el magnicidio del ex presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. En ese marco Haití supone, sin dudas, un desafío para el Estado dominicano, por el influjo que ejerce su crisis sobre el otro lado de la Isla Española.

En lo relativo a lo migratorio, hay una presencia significativa de migrantes haitianos en territorio dominicano que ingresan con la complicidad –y mediante el lucro– de las autoridades dominicanas. Asimismo, hay sectores determinantes de la economía nacional que dependen de la mano de obra haitiana, como la agricultura, construcción y turismo. Se habla incluso de que la soberanía alimentaria

dominicana se vería afectada seriamente con una salida masiva de haitianos del país, siendo éstos el principal factor de trabajo en el rubro agrícola.

Como vemos, la migración haitiana es un desafío muy delicado para la República Dominicana, debido a las complejas aristas que involucra. Sin embargo, este fenómeno otorga ventajas comparativas a los actores económicos dominantes que se aprovechan de una mano de obra barata y disponible para sectores como la producción de azúcar y el turismo. Pese a que lo razonable sería abordar este tema desde diversas perspectivas, con la participación de las múltiples voces e ideologías del espacio nacional, el debate sobre Haití aparece cooptado por una visión ultraderechista de nacionalismo radical. La narrativa que se ha impuesto sobre este asunto entiende a la migración haitiana en clave de amenaza existencial a la patria, y la relaciona con supuestas agendas globales que buscarían la disolución de la nación dominicana. Esto genera estímulos emocionales muy fuertes, que se basan en una narrativa histórica que explica la identidad dominicana considerando a lo haitiano como un exterior constitutivo, como el «ellos» que explica el «nosotros».

Es la “nación existencial”, que define enemigos que se ubican en un afuera de la comunidad política, contraria a la “nación constitucional”, que es la que establece relaciones internas de convivencia institucional (Villacañas, 2020). Esta lógica impera perfectamente en nuestro país, generando reacciones emocionales y primarias frente al significativo Haití, y propiciando una hegemonía cultural casi incontestable. Quien se posicione fuera de este marco, incluso desde coordenadas centristas, es catalogado de “prohaitiano” y traidor a la patria. La ultraderecha logró algo políticamente decisivo: correr las fronteras ideológicas que ordenan la discusión sobre el tema.

Desde la sociedad civil se construyó una dominación cultural que luego encontró expresión en la dirección política del Estado. La actual administración dominicana, considerando el perfil de sus actores principales, no adheriría en principio a estas perspectivas tan extremas. Antes bien, asumía postulados moderados en clave liberal (en el sentido que los estadounidenses dan a este término). No obstante, ya en el poder, y tras la agudización de la crisis migratoria, el gobierno adoptó una postura convergente con el ultranacionalismo existencial. Ante la hegemonía de los significantes reaccionarios, y haciendo cálculos electorales, las autoridades llegaron incluso a desdecirse de sus antiguas posiciones. El tema haitiano es un factor de derechización clave en el espacio ideológico dominicano, y la lógica política de ultraderecha lo impulsa y capitaliza al mismo tiempo.

EL «ENEMIGO FEMINISTA»: LAS TRES CAUSALES DE ABORTO

Por otro lado, tenemos el debate sobre las tres causales de aborto. Es ya un clásico que, en América Latina, el debate sobre la interrupción del embarazo genere un clima de alta tensión entre los sectores ultracervadores y los progresismos y las izquierdas. Por las implicaciones que el hecho tiene –en relación a la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo– el impulso a la legalización del aborto se encuentra en el centro de las agendas feministas. A su vez, el feminismo es hoy uno de los grandes factores de movilización social, toda vez que el significativo derechos de la mujer se ha vuelto hegemónico, siendo defendido por sectores de diferentes tendencias ideológicas (la clave política está en el sentido, si formal o sustancial, que se le da al mismo). Esto choca con los imaginarios conservadores en lo moral-religioso, que siguen definiendo los sentidos comunes, y que relegan a la mujer a un lugar secundario, a la reproducción social y el ámbito doméstico. Por otra parte, el feminismo polemiza con los marcos tradicionales que parten de explicaciones divino-trascendentes, a través de gramáticas sociales resistentes al cambio de paradigmas.

Actualmente, en República Dominicana se debate sobre las llamadas tres causales; es decir, sobre los tres escenarios en los que una mujer podría legalmente interrumpir un embarazo. Estos son: en caso de violación, en caso de riesgo de vida para la mujer gestante, o en caso de malformación del feto. Se trata, pues, de una exigencia de mínimos. Se pide, a través de cauces

institucionales –es ya un debate central en el Congreso– algo razonable y políticamente muy moderado. No obstante, la ultraderecha lo caracteriza como un pedido extremista que atentaría contra Dios y la vida, en el marco de las estrategias ya mencionadas que sitúan en los extremos cualquier atisbo, siquiera leve, de progresismo. De esta manera, no es sólo que lo “extremo” resulta banalizado, sino que se configura un marco de opinión en el que sólo cabe una normalidad: la (ultra)conservadora. Todo lo demás se sitúa en un afuera en donde gravita lo inaceptable, lo inmoral, lo antinatural o lo que ofende a Dios.

Esta operación ha dado amplios réditos políticos a la ultraderecha dominicana. El actual presidente del país apoyó las tres causales cuando se lanzó como candidato, y su partido se comprometió programáticamente con las mismas. Pero, una vez en el poder, ni uno ni otro osan mencionar el tema. Prima el cálculo, por parte de los políticos tradicionales dominicanos, de que apoyar las causales no generaría beneficios electorales inmediatos. Otros temen ser encuadrados como “abortistas” frente a una ciudadanía mayormente religiosa y de escasa formación.

Los dos casos anteriores evidencian cómo la lógica de ultraderecha ha hegemonizado la discusión pública dominicana. Propuestas elementales para solucionar los problemas estructurales del país no logran avanzar porque las fronteras ideológicas se han corrido hacia lejanos extremos derechistas, con lo que la realidad tiende a procesarse en registros reaccionarios que las ubican en coordenadas de luchas existenciales del bien contra el mal. De este modo nuestros problemas fundamentales no pueden entenderse en su naturaleza estructural, en tanto producto de matrices sociohistóricas y correlaciones de fuerza que sólo a través de una política adecuada podrían ser atendidas. Y que, en un sentido democrático, requieren de la participación de todas las voces, sin cancelaciones previas.

Dice Chantal Mouffe (2020) que en un marco democrático ningún grupo puede “reclamar supremacía en la fundación de la sociedad”. La ultraderecha, por el contrario, nos viene a decir que la perspectiva ultraconservadora sí tiene tal supremacía, y que es la esencialmente fundadora del ser dominicano. Ante el encuadre de lo político que esa operación genera, queda poco espacio para el debate en un país constitutivamente diverso como lo es el nuestro. Como resultado, se vuelve casi imposible avanzar en una agenda de derechos (aún dentro de coordenadas socialdemócratas) sin cancelaciones *a priori* ni acusaciones de comunismo y anti-patriotismo que, a su vez, generan efectos de verdad. Así se despliega, al desnudo, la asfixiante lógica de la ultraderecha en este país. ✨

BIBLIOGRAFÍA

Bosch, Matías *et al* (2019). *Caracterización de la Clase Trabajadora en República Dominicana: aportes para la acción social y sindical y la construcción de políticas públicas equitativas en el trabajo*. Santo Domingo: Instituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo (ISCOS), Fundación Juan Bosch y Unión Europea.

Brown, Wendy (2016). *El pueblo sin atributos*. Barcelona: Malpaso.

Foucault, Michel (2007). *El nacimiento de la biopolítica*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Mouffe, Chantal (2020). *El retorno de lo político*. Barcelona: Taurus.

Rodríguez Guerra, Roberto (1998). *El liberalismo conservador contemporáneo*. La Laguna: Servicio de publicaciones Universidad de La Laguna.

Ortiz, Elvin Calcaño (2021). “La razón neoliberal como fundamento de tendencias antidemocráticas y antipolíticas en sociedades contemporáneas”. *El banquete de los Dioses* (9), pp. 313-338.

Piketty, Thomas (2019). *Capital e ideología*. Barcelona: Planeta.

Villacañas, José Luis (2020). *Neoliberalismo como teología política*. Madrid: Ned.

Zuboff, Shoshana (2020). *La era del capitalismo de la vigilancia*. Madrid: Paidós.

Este texto hace parte de una serie de artículos, escritos por ambos autores, que serán publicados en www.alai.info en futuras entregas.

Brasil: bolsonarismo y autofagia

La metáfora resulta tan sugestiva como catastrófica: la de un Brasil que se devora a sí mismo bajo los embates de una sociabilidad despiadada. Conversamos con Fabio Luis Barbosa Dos Santos, autor, junto a Daniel Feldmann, de «Brasil autofágico», editado en español por Tinta Limón Ediciones. ¿Qué tan lejos queda el “post-bolsonarismo”? ¿Será todavía posible contener a los beligerantes y reducir a los irreductibles?

Por **Gabriel Vera Lopes**

GABRIEL VERA LOPES: El bolsonarismo es la expresión nacional de un proceso global de crecimiento de las derechas extremas, derechas alternativas o pos-fascistas –según como se las quiera clasificar–. ¿Cómo definirías este fenómeno y cuáles crees que son sus principales motivaciones?

FABIO LUIS BARBOSA DOS SANTOS: Existen muchos análisis sobre lo que podríamos llamar los distintos “bolsonarismos” a nivel mundial. Creo que hay algunas características en todos estos procesos que los asemejan. Podemos mirar el caso de Turquía, Filipinas, India o El Salvador como formas de respuesta al agotamiento de lo que se percibe como “la política tradicional”, como un hastío respecto de todas las alternativas de

gestión de la sociabilidad neoliberal. Agotamiento que incluye también a las formas de gestión del neoliberalismo que se han ensayado por izquierda. De manera que el bolsonarismo se puede entender como una reinención de la política en tanto conflictividad social. Tengamos en cuenta que, desde los años 80 y 90, una parte de la izquierda se ha vuelto administradora del neoliberalismo, no solamente en Latinoamérica.

Claro que esas formas de gestión del neoliberalismo –por izquierda o por derecha– resultan diferentes, más agresivas o más inclusivas según el caso. Sin embargo, desde el punto de vista de los de abajo, la diferencia no es tan sustancial: estructuralmente, las condiciones de vida de mucha gente se modifican

El bolsonarismo reinventó la política como conflicto, algo que tradicionalmente la izquierda reivindicaba

escasamente. Concretamente, en el caso brasileño, el bolsonarismo se configura como una reacción frente a la desilusión ante las promesas de la «Nueva República». Es decir, de la institucionalidad democrática que se afirma en Brasil en la post dictadura, políticamente encarnada en la alternancia entre los «tucanos» [como se llama coloquialmente a los partidarios del Partido de la Social Democracia Brasileña, el PSDB] y el Partido de los Trabajadores (PT). El bolsonarismo irrumpe como un tercer actor que se perfila en contra de los dos partidos mayoritarios. Lo mismo hace el bukélismo en El Salvador, en contra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), proponiendo cambios radicales y oponiéndose a la institucionalidad construida tras el conflicto armado salvadoreño.

Es cierto que desde el punto de vista de las estructuras económicas la radicalidad de estos fenómenos emergentes es superficial. Sabemos que tanto el bolsonarismo como el bukélismo son gobiernos llamados a profundizar y acelerar la lógica depredatoria del capital y de la sociabilidad neoliberal. Sin embargo, estas fuerzas aparecen revestidas de una forma política que hace de la cultura uno de sus principales campos de batalla. Son formas políticas que se perciben –y acá hablo

específicamente del caso brasileño– como revolucionarias y como portadoras de una misión redentora y civilizatoria.

Es por eso que una forma política como el bolsonarismo mantiene afinidades electivas con tropos religiosos, apocalípticos y mesiánicos, encarnados en las iglesias evangélicas neopentecostales –aunque no exclusivamente, ya que también están presentes en sectores conservadores del catolicismo–.

GVL: Y dentro de ese contexto más general, ¿cuáles son las características específicas del bolsonarismo?

FLB: Quisiera desarrollar tres ideas, que ya sugerí antes. La primera es que el bolsonarismo reinventó la política como conflicto, algo que tradicionalmente la izquierda reivindicaba, al considerar a la historia como la historia de la lucha de clases, lo que implica de por sí asumir el conflicto. Pero tras décadas de gobiernos progresistas en Latinoamérica –y el de Lula da Silva es un caso muy emblemático– los progresismos se han volcado a una política de conciliación, prescindiendo ya del enfrentamiento y la transformación. Pero cuando las bases históricas que permitieron esa conciliación se fueron agotando, la conflictividad volvió a surgir de manera descarnada, siendo capitalizada y reivindicada por el bolsonarismo.

En segundo lugar, el bolsonarismo es un proyecto político-cultural que se identifica con la aspiración de transformaciones radicales. Esto coloca a la izquierda latinoamericana ante un interrogante muy incómodo: ¿era verdad entonces que no había una disposición popular para emprender cambios sustantivos? Porque ese ha sido un discurso muy frecuente del progresismo en general y del lulismo en particular. Formas políticas como el bolsonarismo sugieren que sí hay una disposición extendida para las políticas radicales.

En tercer lugar, y este es un tema muy importante, esta propuesta de cambio radical se afirma en el campo de acción de lo político y lo cultural –aunque no tanto en lo económico–. Porque, como decía, el capital, la rentabilidad y la sociabilidad neoliberal no son cuestionados; al contrario, sus procesos se aceleran y profundizan. Desde este punto de vista, y asumiendo que hay una batalla cultural en curso, la derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones brasileñas de 2022 debe ser interpretada como el resultado de una batalla, pero no como el resultado de la guerra.

Lo que en estos años llamamos de manera genérica bolsonarismo, es decir el colectivo que percibe a su contexto como una cruzada civilizatoria, está compuesto por sectores que mantienen afinidades electivas entre sí, que no se reducen al liderazgo de Bolsonaro. Estos sectores siguen operando, independientemente de que ya no ocupen el poder ejecutivo.

¿A qué actores me refiero en concreto? Por ejemplo a la policía, que se auto percibe como un bastión para la salvaguarda del orden, al igual que los militares. A los sectores evangélicos o católicos conservadores, motivados por lo que perciben como una guerra para construir una nación cristiana. Al crimen organizado, expresado en la interpenetración de la política con las milicias [organizaciones paramilitares arraigadas en las periferias urbanas]. Es decir, al «poder miliciano», lo que se conoce en Colombia como la «parapolítica». Son fuerzas sociales que se retroalimentan en su relación con el bolsonarismo, pero que no pueden ser reducidas a él. El empoderamiento de la policía; el despliegue del cristianismo conservador como actor político organizado; la interpenetración de políticos y milicianos; son todas fuerzas que siguen activas, que continúan operando y que no se desmovilizaron ante el cambio electoral.

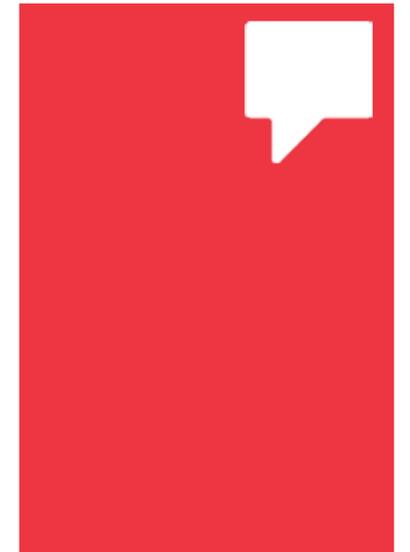
GVL: Siguiendo este razonamiento, ¿qué desafíos le imponen aquellos sectores al tercer gobierno de Lula da Silva?

FLB: Esta situación plantea un dilema. Como todos saben, la estrategia y la sabiduría política del lulismo se basan en la conciliación. Pero cabe preguntarse: ¿cuál es la conciliación posible cuando el otro bando no pretende ningún acercamiento, y cuándo interpreta este escenario como una guerra? Paulo Arantes, un filósofo brasileño, escribió a propósito de la rebelión de junio del 2013: “Después de junio la paz será total”. En ese momento se hizo evidente una alianza entre los intereses del partido del orden, que incluye a sectores del PT y a los «tucanos». Para ser más concretos: la alcaldía

de San Pablo, que se encontraba gobernada por Fernando Haddad –quien después fue candidato presidencial por el PT– y la gobernación de Gerardo Alckmin –del PSDB, y actual vice de Lula– se unieron en la represión y en la difamación de la rebelión de junio. Pero ahora, parafraseando a Arantes, podemos decir que después de octubre de 2022 la paz ya no podrá ser total, porque el otro lado declaró la guerra. Desde esta perspectiva, mirando el proceso brasileño en un cuadro histórico más amplio, creo que es posible interpretar la victoria de Lula como una tregua.

¿Cuál es la conciliación posible cuando el otro bando no pretende ningún acercamiento, y cuándo interpreta este escenario como una guerra?

En nuestro libro [escrito junto a Daniel Feldmann y editado en español bajo el título «Brasil autofágico»], describimos la dinámica social de estos años como una «desocialización autofágica». ¿Qué quiere decir esto? Partimos de la idea de que el neoliberalismo es una máquina de producir miedo, odio e indiferencia, y que lo hace a partir de corromper y erosionar los lazos sociales. Así sucede, por ejemplo, con las relaciones laborales, induciendo a que cada quien tenga que inventarse su propio trabajo: de ahí es que surge la racionalización del «emprededurismo». Por otro lado, erosiona los derechos sociales de aquellos pocos que podían hacer parte de un estado de bienestar social periférico. Ambos movimientos





producen desamparo, y ese desamparo genera una sociabilidad marcada por el miedo, el odio y la indiferencia. De esos sentimientos se alimentan los bolsonarismos en todo el mundo. Se trata de una dinámica que no interrumpen los cambios políticos ni las coyunturas electorales.

Para sectores del bolsonarismo la toma del Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir una nueva sociedad de signo reaccionario

En el libro intentamos interpretar por qué el PT fue defenestrado durante el 2016. Pero también buscamos comprender por qué ese partido –y particularmente Lula– recobraron su centralidad pocos años después de haber sido perseguidos y encarcelados. Lo que tratamos es señalar cómo esa sociabilidad que llamamos «autofágica» produce estos fenómenos, aún vigentes pese a la tregua abierta con la victoria de Lula. Esto no quita que aquella haya sido importante, importantísima incluso, pero partimos de reconocer sus límites.

GVL: La gran mayoría de los análisis progresistas se limitan a denunciar la “manipulación” que las derechas operan a través de las *fake news* y otros instrumentos, lo que niega capacidad de agencia a esos sectores presuntamente manipulados. Pero, más importante aún, de esta manera se soslaya la capacidad que las derechas tienen de articular y representar los malestares y

frustraciones vitales reales que, en definitiva, constituyen un espacio privilegiado de la batalla política.

En este punto, quisiera volver a preguntarte sobre esta idea de que el progresismo se transformó en una suerte de gestor de la crisis. Si para la izquierda del siglo XX la crisis implicaba una oportunidad para actuar, para una parte importante de la izquierda y el progresismo de nuestra época la crisis aparece como algo a evitar. Se abandona así una tesis que está en el corazón mismo del marxismo –y el pensamiento crítico en general–, y es que más allá de nuestra voluntad, la crisis está inserta en la propia dinámica de acumulación del capital. Es decir, que el sistema tiende a la crisis.

FLB: Es importante subrayar que el bolsonarismo, a la manera de la izquierda histórica, comprende en este momento a la política más allá de la disputa electoral. Y eso es algo que quedó claro en acontecimientos recientes, como los sucedidos el 8 de enero del 2023. Podemos incluso pensar que de la misma manera que la izquierda comprendió la toma del poder del Estado en los siglos XIX o XX como una condición, como un instrumento para la construcción del comunismo o de una sociedad emancipada, para sectores del bolsonarismo la toma del Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir una nueva sociedad de signo reaccionario.

Es algo similar a lo que está pasando en la India en este momento. El partido en el poder [el Partido Popular Indio de Narendra Modi], estableció las reglas para construir una sociedad hindú, bajo la concepción de un nacionalismo hindú.

Aquí también la toma del poder es concebida como un instrumento más que como una finalidad. Por el contrario, la izquierda progresista se convirtió en gestora del orden, es decir, quiere ocupar el Estado como un fin. Entonces, lo que estoy intentando ilustrar es que hay una especie de inversión que es a la vez una perversión; que la derecha ha pervertido la radicalidad política al reinventarla como conflictividad, al asociarla a un horizonte de cambio radical, y al incorporar una dimensión cultural y práctica que excede a lo electoral.

En segundo lugar, creo que es correcta la forma como lo estás enunciando. Para el progresismo la crisis se ha vuelto algo a evitar, mientras que para la tradición de la izquierda revolucionaria la crisis siempre fue una oportunidad de cambio radical. Incluso las guerras hacían parte del pensamiento estratégico, como se evidenció en la lectura del bolchevismo sobre la Primera Guerra Mundial.

GVL: La idea leninista de transformar la guerra imperialista en una guerra de clases, es decir, en una oportunidad para abrir un camino revolucionario...

FLB: Exacto. Es que la izquierda no estaba interesada en gestionar las situaciones, sino en transformarlas. Y desde el punto de vista de la transformación, la crisis abre una oportunidad de cambio radical. Pero no ha sido esta la trayectoria de la izquierda reciente. Desde este enfoque es posible comparar el lulismo y el bolsonarismo: mientras que el primero se ocupa de contener la crisis, el segundo gobierna acelerándola. Al contener –en el sentido de no proponer cambios estructurales– se aborda esa sociabilidad autofágica que describimos con tecnologías muy bien desarrolladas para gestionar las tensiones sociales. Para aclarar: mi crítica no va en el sentido de señalar que esa contención es mala, sino en el de identificar cuáles son los límites de esa política.

Podríamos suponer, por ejemplo, que si el PT hubiera gobernado Brasil durante la pandemia, habría construido una arquitectura de contención de la crisis sanitaria muy importante y eficaz, partiendo desde sus mismas premisas, pero sin subvertir, por ejemplo, la austeridad fiscal. ¿Cuál es el marco de lo posible con tecnologías de gestión de las tensiones sociales que se aplican sin abrir conflictos con el capital? Esa es una pregunta que enfrenta la izquierda progresista.

Por su parte, el bolsonarismo es completamente distinto. Partió de identificar a la crisis de la pandemia como una oportunidad, a la manera de como lo hacía la izquierda. Por eso el bolsonarismo surfea la crisis; porque se alimenta de ellas. Evidentemente la pandemia fue un hecho trágico que nos costó millones de vidas. Y evidentemente es mucho mejor gestionar la crisis que gobernar por medio de ella.





¿Por qué importantes sectores del capital local apoyaron el regreso de Lula? Porque el bolsonarismo arriesgó convertirse en disfuncional para la lógica del mismo capitalismo

GVL: En ese juego de complejidades se ven obligados a moverse los movimientos sociales...

FLB: Ahí también hay dos puntos que quisiera señalar. En primer lugar, que el progresismo acaba por convertirse en una política del “mal menor”. Lo cual no es poco ni resulta irrelevante. Como las alternativas al progresismo –más aún una alternativa tan radical como el bolsonarismo– aceleran de manera espectacular la crisis, la propuesta de una política de contención adquiere una relevancia cada vez mayor. Yo diría que ese es el fundamento del lulismo o el de la política del “mal menor” lulista.

Se habilita así un discurso político que dice: “tenemos que juntarnos para combatir un enemigo fundamental que es el bolsonarismo; por lo tanto vamos a olvidar las diferencias con Alckmin, las diferencias entre nosotros, no vamos a hacer críticas y vamos a cerrar filas para ganar”. Esto no es falso, por supuesto. Pero entraña a la vez un dilema para los movimientos sociales. Porque significa que también los movimientos sociales son convocados de alguna manera a desnaturalizarse, a dejar de lado su razón de ser.

Voy a ponerlo de la siguiente manera: si suponemos que la razón original del PT –o de la izquierda

partidaria– es subvertir el orden social y superar el capitalismo, pero que en esa dinámica autofágica se va convirtiendo más y más en el partido del mal menor y por lo tanto en una alternativa no sólo de gestión de la sociabilidad autofágica, sino incluso de la viabilidad del capitalismo periférico, después se vuelve imposible discutir esto. ¿Por qué importantes sectores del capital local apoyaron el regreso de Lula? Porque el bolsonarismo arriesgó convertirse en disfuncional para la lógica del mismo capitalismo.

Por su parte, los movimientos sociales son convocados a integrar frentes cada vez más amplios para defender cada vez menos derechos. Si el precio del apoyo de un movimiento popular al gobierno es el de no presionar, el de frenar las movilizaciones y actuar como un dique de contención de la lucha social –porque se generan tensiones y estas tensiones pueden “hacerle el juego a la derecha”– ahí se presenta un dilema. Ser la base de sustentación de un gobierno puede ser muy necesario y hasta efectivo para frenar los efectos más corrosivos del neoliberalismo, pero a la vez implica el riesgo de convertirse en un gestor social de políticas de contención que no dan respuestas estructurales. Es un dilema y un dilema es, obviamente, una situación para la que no hay una respuesta fácil.



GVL: En definitiva, ¿qué cabe hacer frente al bolsonarismo?

FLB: Antes, creo importante reforzar que la política progresista es una política que de manera abierta y explícita no se propone transformar estructuralmente las sociedades. Lo que le interesa es ante todo ocupar el Estado, y no quiero sugerir que esto sea un pecado, sino que lo introduzco como elemento de análisis. El progresismo percibe que es mejor que sean ellos, y no los bolsonaristas, quienes ocupen el Estado, lo que es correcto desde el punto de vista de lo popular. Pero en este sentido la ocupación del Estado aparece como un fin. ¿Cómo responder a este dilema? Evidentemente los movimientos sociales tienen su sabiduría, y no hay nadie que pueda decirles lo que tienen que hacer.

Creo que es necesario mirar, en la región, caso por caso. Enfrentar al bolsonarismo no es lo mismo que enfrentar al macrismo, aunque en Argentina hubo un esfuerzo por construir una polarización similar a la brasileña, para aglutinar y organizar un frente amplio contra [Mauricio] Macri. El caracterizar a Macri como si fuera un Bolsonaro parte de estas mismas necesidades de construcción frentista, y de los intentos de refrenar la crítica interna, pero a mi no me parece que Macri sea una figura equivalente a Bolsonaro.

Decía que en Brasil estamos en una suerte de tregua. ¿Y qué es lo que podremos hacer en esta tregua? No se va a cambiar la estructura social ni superar el capitalismo, eso ya lo sabemos. ¿Pero qué podremos hacer más allá del programa Bolsa Familia, un programa que incluso fue apropiado por Bolsonaro, que incrementó el monto de las asignaciones percibidas? Y que en campaña electoral se mofaba, diciendo a Lula de manera descarada: “si eras tan amigo de los pobres, ¿por qué pagabas tan poco?”.

¿Qué más se podría hacer en este caso específico? Se podría, por ejemplo, juzgar a los bolsonaristas que cometieron crímenes en el gobierno, e incluso antes. Según diversos estudios, muchos de ellos fueron cómplices, partícipes y hasta torturadores en la dictadura militar. Uno podría analizar esto como un síntoma, a la manera psicoanalítica, y pensar que fue la amnistía de la dictadura la que permitió el bolsonarismo. Si las causas no son atendidas, los síntomas regresan de manera inevitable. ¿Qué sería entonces atender el síntoma? No permitir una segunda amnistía, para que el bolsonarismo no se repita. El mismo hecho de que Bolsonaro haya terminado su mandato presidencial implica normalizar esta forma política y toda la barbarie que implicó. Juzgarla no cambiará su naturaleza social, ni la del neoliberalismo, ni mucho menos la del capitalismo, pero permitirá al menos no normalizarla. Esa posibilidad está al alcance del nuevo gobierno, pero implica asumir la lógica del conflicto. ✂



Nayib Bukele, la ley de la excepción

Nayib Bukele es el hecho maldito del país bipartidista. Pragmático, contestatario, autoritario, millennial. La nueva estrella centroamericana, como algunos de sus pares de la región, emerge triunfante de la crisis de los sistemas políticos tradicionales. ¿Pero qué hay detrás del “dictador más cool del mundo mundial”, como supo definirse el joven mandatario?

Por **Juan Manuel Erazo**

El montaje es cinematográfico. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sube a sus redes sociales un video que muestra el traslado de dos mil reos al nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La flamante cárcel cuenta con capacidad para 40 mil presidiarios, lo que la transforma ahora en la más grande del continente.

“Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, tituló el mandatario, quien recibió mayormente comentarios positivos por el nuevo lanzamiento. En las redes sociales, perfiles vinculados a organizaciones de derecha enviaron sus felicitaciones al presidente salvadoreño. Las imágenes despertaron el interés de la prensa internacional, que comenzó a mostrar fotografías del interior de la cárcel, junto a noticias que

remarcaban la “preocupación” por parte de EE.UU. ante el avance de la política de seguridad de Bukele.

Si uno pone el nombre de Nayib Bukele en un buscador, las principales respuestas estarán vinculadas a identificar si el mandatario es de derecha o de izquierda. Su retórica contestataria contra la influencia norteamericana y las oligarquías locales, sus vínculos comerciales con China, junto a su antiguo paso por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), podrían ubicarlo en el lado izquierdo del espectro político. No obstante, su feroz política de seguridad interna, la utilización del partido conservador Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANU) para poder participar en las elecciones del 2019, las acusaciones de nepotismo, la persecución a militantes del FMLN y su sistemática ocupación de todos y

Ninguna de las dos fuerzas políticas de mayor envergadura pudo dar respuesta al aumento de la violencia en las calles, ni tampoco a los altos índices de pobreza estructural de la nación centroamericana

cada uno de los poderes del Estado, son elementos que parecerían ubicarlo en el flanco derecho del sistema político.

Pero esto es América Latina, y los sistemas de clasificación a la europea suelen aportar más dolores de cabeza que certezas, cuando no acaban por explotar por los aires. Más aún: esto es América Latina, una región sumida en plena crisis de los sistemas democráticos paridos post Consenso de Washington, allá por 1989. Esta es una América Latina al desnudo, que vive un proceso de alta tensión y confrontación entre fuerzas políticas e intereses que ya no encuentran lugar en las urnas. Esto es América Latina en la era de las redes sociales, la sobre información, las guerras híbridas y las grandes olas migratorias. Es en esta encrucijada de nuestro devenir histórico que nacen los Nayib Bukele, quienes muchas veces logran hacer ley permanente de los estados de excepción.

LA EXCEPCIÓN AL SISTEMA POLÍTICO

Enero de 1992. El gobierno de El Salvador firma junto al FMLN los Acuerdos de Paz de Chapultepec, poniendo fin a más de una década de enfrentamiento militar entre

la guerrilla y el Ejército, en lo que se conoció como la Guerra Civil de El Salvador (1979-1992). La modificación de las Fuerzas Armadas; la creación de la Policía Nacional Civil; diversas modificaciones al sistema judicial; la defensa y ratificación de la vigencia de los derechos humanos; ciertas reformas en el sistema electoral; y la adopción de medidas en el campo económico y social, fueron los puntos centrales plasmados en un documento que firmaron de manera conjunta las distintas partes. El cumplimiento de los acuerdos se dio bajo la tutela de una misión especial de la Organización de Naciones Unidas –la ONUSAL– que operó, hasta acabar su gestión, entre los años 1992 y 1995.

A partir de ese momento, la disputa política se trasladó al terreno electoral, pasando a ser el FMLN y el derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) los partidos mayoritarios. El FMLN sufrió el complejo proceso de transición de una estructura político-militar a una político-electoral, lo que le valió un derrotero prolongado de rupturas y conflictos internos, pese a lo cual pudo lograr su primer triunfo presidencial en 2009 de la mano de la candidatura de Mauricio Funes. ARENA, por su parte, se vio envuelto en diversos casos de corrupción y

abuso de autoridad en sus sucesivos gobiernos.

Ninguna de las dos fuerzas políticas de mayor envergadura pudo dar respuesta al aumento de la violencia en las calles, ni tampoco a los altos índices de pobreza estructural de la nación centroamericana. En octubre del 2018, una nueva figura emergería de las entrañas del FMLN para sacudir el tablero de la contienda política en El Salvador. “Con respeto a la ley, hoy damos inicio a nuestra campaña electoral”, diría entonces frente a la pantalla de su celular el joven Bukele.

“Bukele representa una renovación de la política y de sus dinámicas, así como el salto de una forma de disputa tradicional y partidaria a una de tipo «antipartido», junto con una revolución de la forma de comunicar”. Raúl Palencia es salvadoreño, residente y militante en Argentina. Tiene mucho para contar sobre Bukele, y sobre los nuevos mecanismos del incomprendido sistema político salvadoreño.

“Él nunca fue orgánico del FMLN. Comenzó a trabajar a través de una empresa de comunicación, y fue cuando Mauricio Funes ganó la presidencia en 2009 que comenzó a tener más protagonismo. En 2012 fue candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán. Estamos hablando de un municipio periférico del área metropolitana”, aclara Palencia. El viejo FMLN, con sus férreos lineamientos ideológicos y políticos, desarrolló con Bukele su experimento de entrada a la nueva política, signada por la utilización de redes sociales, los mensajes teledirigidos a los sectores medios y la renovación carismática de las referencias y candidaturas. Fruto de esta búsqueda,

el partido heredero de la antigua guerrilla volvió a apostar por Bukele, esta vez para alcalde de la capital San Salvador, en la que se aseguraría el triunfo en el año 2015.

En 2017 fue expulsado del FMLN por “violar la carta de principios, objetivos, estatutos, reglamento y demás normas” del partido; por promover la “división interna con argumentos de conducta personalista”; por realizar presuntos “actos difamatorios” contra el FMLN; y por supuestas agresiones verbales y físicas contra la entonces síndica municipal, Xóchitl Marchelli. En un sistema político con dos partidos tradicionales tan arraigados, esto pudiese haber significado el fin de su carrera. Pero en un proceso de crisis sistémica, el traspíe se convirtió en oportunidad.

Escindido del FMLN, y enfrentado a ARENA por representar distintos sectores dominantes en disputa (la nueva burguesía, fruto de las olas migratorias de Medio Oriente, contra la vieja oligarquía terrateniente de estirpe criolla), Bukele transformó los métodos de comunicación por internet en la base de su perfil político. Mediante estas herramientas, el actual mandatario no perdió nunca el contacto directo con su base de votantes. Incluso la estructura político partidaria quedó en un segundo plano, una vez copado el almacén del GANA, un partido antes condenado al lejano tercer puesto, acreedor de un porcentaje menor de votos. Desde esa cáscara, y con un dominio experto de las redes sociales, Bukele fundó el Movimiento Nuevas Ideas, que en 2019 rompió con casi treinta años de bipartidismo salvadoreño, dándole un impresionante 53 por ciento de los votos, coronándose presidente a la edad de 37 años.

Para las nuevas generaciones de salvadoreños las contiendas de la Guerra Civil son ya parte de los libros de historia. Nuevas problemáticas como la inseguridad, el surgimiento de las organizaciones delictivas conocidas como «maras» y las olas migratorias comenzaron a ganar un importante lugar en la agenda pública, sin que los dos partidos mayoritarios pudiesen dar una respuesta efectiva. Bukele respondió al llamado, y aún sigue contestándolo.

modernizar la policía, como parte de su plan de guerra contra las maras. Para ese entonces, el parlamento salvadoreño continuaba aún dominado por las dos históricas fuerzas bipartidistas.

Bukele oró, mirando al cielo, y lloró frente a las cámaras. Mientras los soldados intimidaban a los asambleístas con su mera presencia, el actual presidente hizo su principal demostración de fuerza, como si dijese: “ahora el Ejército está de

El viejo FMLN, con sus férreos lineamientos ideológicos y políticos, desarrolló con Bukele su experimento de entrada a la nueva política, signada por la utilización de redes sociales, los mensajes teledirigidos a los sectores medios y la renovación carismática de las referencias y candidaturas

LA SUMA DEL PODER PÚBLICO

El 9 de febrero del 2020, en vísperas de la cuarentena decretada por la pandemia del COVID-19, el joven mandatario salvadoreño irrumpió en la Asamblea Legislativa con una impresionante escolta militar. Los soldados rodearon la sala, sin atacar, pero sin moverse del lugar, en actitud amenazante. El gobierno intentaba entonces obtener el apoyo necesario para conseguir un préstamo de 109 millones de dólares, que serían utilizados para

mi lado”. Además, con el arrasador triunfo en las elecciones legislativas del 2021, Nuevas Ideas pasó a controlar 56 de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa, sin contar los votos sumados de los partidos aliados. Esta composición, este nuevo equilibrio de poder, transformó al poder legislativo local en una mera escribanía del poder ejecutivo. En mayo del 2021, la actual composición del legislativo aprobó la destitución de los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, principal instancia jurídica del país, así como del titular

de la Fiscalía General del Estado, nombrando en su reemplazo a jueces cercanos al actual mandatario. De esta manera, Bukele consiguió extender su influencia a los tres poderes del Estado que reconoce la Constitución salvadoreña.

Hasta ahora hay al menos dos cosas ciertas. En primer lugar, queda claro que Bukele es una figura carismática y extremadamente popular –de hecho diversas encuestas lo ubican como uno de los presidentes mejor ponderados de la región, cuando no el mejor– que ha logrado, mediante los mecanismos dispuestos por el sistema electoral, hacerse con la presidencia y con una amplia mayoría parlamentaria. Y que ha utilizado caminos, en principio lícitos, para reformar el poder judicial, aunque sea en su favor. Pero, en segundo lugar, no podemos desconocer que la concentración del poder en manos de un conductor personalista y altamente pragmático ha demostrado ser problemática en otros momentos históricos.

Si al segundo punto le sumamos la presencia de relaciones familiares ubicadas en lugares sensibles del Estado –anillo de cebolla que se amplía con relaciones de parentesco más lejanas, con amistades y alianzas– estamos hablando de un cóctel mucho más complejo. Karim, Ibrajim y Yusef Bukele Ortez componen el anillo de poder más influyente alrededor del presidente. Son sus hermanos, hijos como él de la pareja formada por Armando Bukele Kattán y Olga Ortez. Aunque no tienen cargos públicos oficiales, numerosas fuentes –y en ocasiones ellos mismos– han confirmado que se desempeñan como los principales estrategias, lobbistas y emisarios del gobierno. El esquema incluye a otros parientes del presidente, ubicados estratégicamente en distintos círculos y puestos clave de decisión.

Agreguemos a esto la persecución a referentes de la prensa y la oposición, centralmente del FMLN, que debieron exiliarse del país. Distinta es la suerte que atraviesa ARENA, partido tradicional de la derecha salvadoreña. Las diversas maniobras del presidente Bukele provocaron resistencias y manifestaciones, en un contexto en el que no todo es imagen positiva y popularidad. Dos de las más

grandes manifestaciones de rechazo se vieron a finales del 2021, congregando a diversos sectores de la población que denunciaron una deriva autoritaria por parte del gobierno, como de hecho lo vienen haciendo también diferentes medios de prensa y organismos de derechos humanos.

Así recuerda Palencia aquellas jornadas de protesta: “Un momento interesante fue septiembre de 2021, cuando se celebraba la independencia de México y varios países de Centroamérica. Bukele había gastado muchísimo dinero en festejos, pero la imagen que más recorrió los medios fue la masiva manifestación ocurrida en San Salvador. Fue una cachetada de parte de muchos que habían puesto un voto de confianza en él”.

#GUERRA CONTRA PANDILLAS

Es casi un lugar común recordar que la tasa de homicidios en El Salvador es una de las más altas del mundo. El país centroamericano

llegó a registrar tasas de entre 36 y 103 homicidios por cada 100.000 habitantes entre los años 2015 y 2019. Si bien el gobierno de Bukele se caracterizó por emprender una guerra frontal contra las maras y por un descenso muy marcado de la tasa de homicidios, no es la primera vez en la historia del país que los índices de violencia e inseguridad registraron variaciones significativas a la baja. Algo parecido había sucedido ya en el período 2011-2013, y en el que va de 2015 a 2019. ¿Explica entonces la política de mano dura de Bukele los números actuales? Incluso el mismo

FMLN había aplicado ya políticas similares, con la militarización de barrios y el aumento de los controles policiales y gubernativos.

Para muchos especialistas, no es precisamente la política de mano dura la causante de la caída de la tasa de homicidios, sino el acuerdo de las pandillas entre sí, y entre éstas y el mismísimo gobierno. Según el periódico El Faro, Bukele habría negociado con los principales cabecillas de las maras a cambio de control territorial y apoyo electoral. De hecho, cuando la Asamblea Legislativa bajo su

Para muchos especialistas, no es precisamente la política de mano dura la causante de la caída de la tasa de homicidios, sino el acuerdo de las pandillas entre sí, y entre éstas y el mismísimo gobierno

control destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General, estos se encontraban investigando estas denuncias, así como presuntos hechos de corrupción cometidos por parte de su gobierno. Paralelamente, Osiris Luna Meza, Director General de Centros Penales, ordenó retirar cientos de libros de novedades y computadoras de algunas cárceles de máxima seguridad; y el fiscal impuesto por la asamblea oficialista desmanteló el grupo especial que investigaba estos contactos y negociaciones. “No contamos con datos fehacientes por parte del Estado, no hay un correcto acceso a la información pública”, sostuvo la directora del



Perú: crisis, dictadura y despertar constituyente

Crisis sobre crisis, la situación en el Perú parece un palimpsesto con innumerables capas mal sedimentadas: del Virreinato a la República colonial, del autogolpe fujimorista a la guerra sucia, de la esperanza de “Castillo el breve” a una revancha antipopular que no tiene correlación alguna con la presunta ofensa cometida. El Perú parece haberse visto por fin en el espejo de su colonización, y su imagen no es precisamente la soñada por las pálidas élites limeñas.

Por **Lucía Alvites**



Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) de El Salvador, Gabriela Santos. El régimen de excepción fue ampliamente aceptado por la población, creyéndolo una medida necesaria y eficaz para combatir a las maras, cuando en realidad la reducción sustantiva de los homicidios se dio antes de su entrada en vigencia. Por la evidencia aportada por las investigaciones periodísticas, se pudo comprobar que esta se derivó de las negociaciones entre el gobierno y las pandillas.

“Ninguna de las canciones que andan cantando los organismos internacionales en pro de la defensa de los derechos de estos criminales nos va a hacer cambiar nuestra estrategia. Al contrario, vamos a duplicar nuestras acciones en el territorio”, fueron las palabras del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en un mega operativo que terminó con la detención de tres presuntos asesinos de policías.



Por otro lado, los organismos de derechos humanos parecen ser los otros enemigos de la retórica de seguridad del oficialismo. “Actualmente estamos atravesando nuestro onceavo régimen de excepción, que implica el cese de algunas garantías constitucionales y la libertad de las fuerzas de seguridad de detener, sin orden judicial, a todo aquel que sea sospechado de ser mara”, explica Palencia. Y agrega: “Los cuerpos de seguridad han detenido unas 60 mil personas y, si bien las detenciones duran hasta un máximo de treinta días, estas se van renovando”.

“Bukele ha desguazado muchas de las políticas sociales que el FMLN había llevado adelante durante sus gobiernos. Hay algo de esta política de seguridad definida como «guerra al narcotráfico» que no deja de tener su anclaje en los esquemas desplegados por Estados Unidos en la región”, analiza Palencia. Efectivamente, el mecanismo de respuesta bélica al narcotráfico, propagado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y desplegado ejemplarmente en México y Colombia, ha multiplicado los niveles de violencia, ha desprofesionalizado a las fuerzas armadas, ha implicado la utilización de métodos militares para el control de poblaciones y territorios, y ha generado el desplazamiento y la muerte de decenas de miles de personas en nuestra región.

Un ejemplo del uso de esta política como cobertura para la criminalización y persecución de poblaciones, fue la reciente detención de líderes de la comunidad de Santa Marta, conformada por ex exiliados y ex militantes políticos del FMLN durante el conflicto interno armado.

En un comunicado del 8 de febrero, IDHUCA, Cristosal, AMATE, la Red Salvadoreña de Defensoras, entre otras organizaciones, buscaron hacer contrapeso al festejo por los “300 días sin homicidios” propuesto por Bukele. En su denuncia pública, las entidades firmantes aseguran: “El periodo excepcional de suspensión de derechos se ha convertido en una política estatal permanente que expone a todas las personas del país a procesos judiciales sin la garantía del debido proceso, además de una serie de abusos por los que el Estado continúa sin responder ante la ciudadanía y organismos internacionales”.

A la fecha hay más de 4.500 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos. Detenciones arbitrarias, acoso, amenazas, lesiones graves, son sólo algunas de ellas. Muchas fueron realizadas contra mujeres, y la mayoría contra jóvenes de entre 18 y 30 años, que son unos de los sectores más estigmatizados. Asimismo, las disidencias sexuales se vieron afectadas con casos graves de acoso y de abuso por parte de los efectivos policiales.

Como se ve, no todo lo que brilla es oro, ni todos los enemigos de nuestros enemigos (al menos en redes sociales) son necesariamente nuestros amigos. De todos los procesos de degradación democrática, el de El Salvador tiene ribetes muy propios que lo vuelven inasimilable a otros casos de América Latina y el Caribe. Algo es seguro: el fenómeno Bukele seguirá dando que hablar, y los enconados debates para caracterizar al presidente más popular, controvertido e inasible de nuestra región –el “dictador más cool del mundo mundial”, como se autodenominó– seguirán su curso. ✂



RAÍCES DE LA “REPÚBLICA COLONIAL”

Miles de peruanos y peruanas del sur arriban desde hace meses a Lima para hacer oír su voz, para sentenciar que existen, para que el país que dice que es suyo les vea, a pesar de la continuidad ininterrumpida de los asesinatos extrajudiciales, las detenciones ilegales, las torturas y otras múltiples violaciones a sus derechos humanos. ¿Pero por qué estos miles y miles dejan atrás sus tierras, sus hogares, sus familias, tratados como criminales por una policía que intenta evitar a toda costa que lleguen a la ciudad capital, a esa ciudad en donde se emplaza el Estado y toda su institucionalidad, allí “donde ocurren las cosas”, a donde se toman las decisiones de las que sistemáticamente resultan excluidos?



La herencia del Virreinato y la Colonia es mucho más que un mal recuerdo o una rémora ancestral, dado que sus modalidades de opresión aún definen en buena medida quién es quién en el Perú

Quizás sea este largo peregrinar el que mejor exprese las profundas raíces históricas de la peor crisis que haya atravesado el Perú contemporáneo. Porque primero que nada debemos entender por qué es necesario llegar a Lima para ser escuchado, por qué es que en Lima puedes dejar de ser “nadie”, por qué la vida vale tanto más en la ciudad capital que en el resto de los territorios del Perú. Y es que la

herencia del Virreinato y la Colonia es mucho más que un mal recuerdo o una rémora ancestral, dado que sus modalidades de opresión –el sistema de castas y la noción de raza que le hace de hilo conductor– aún definen en buena medida quién es quién en el Perú. El racismo explica aún hoy la desigual distribución de recursos y oportunidades, así como la asignación de los espacios de poder en donde se toman las grandes decisiones nacionales.

La fórmula dominante del Estado-nación, concebida en Europa y cimentada allí con los recursos despojados de las colonias –incluidos nuestros territorios– no implicó en el Perú procesos de democratización y universalización de derechos; no constituyó pisos mínimos de ciudadanía e igualdad –siquiera formal– a quienes nacimos en este país. Con breves pero destacables excepciones, el poder económico y político fue ejercido, a lo largo de estos 200 años de vida colonial-republicana, por una élite blanca y urbana que construyó un Estado a imagen y semejanza de sí misma y de sus propios intereses, excluyendo y negando a las amplias mayorías indígenas y campesinas.

En la carrera febril por construir un Estado sin nación, una patria sin gente, el Estado peruano estimuló y legalizó relaciones laborales pre-capitalistas en las zonas rurales hasta la segunda mitad del siglo XX, con mayorías indígenas carentes de todo derecho, cuyas vidas y destinos pertenecían a la clase propietaria, dueña de las haciendas. Estas relaciones laborales hegemónicas en el campo fueron quebradas con la reforma agraria de finales de la década del sesenta, impulsada primero por un movimiento

campesino robusto y luego por la decisión política del gobierno del General Juan Velasco Alvarado, que redistribuyó la tierra, tirando abajo el latifundio.

Sin embargo, el trato clasista y racista hacia las poblaciones excluidas persistió en el Perú oficial. Sobrevivió en los trabajos “asignados” a la población migrante que llegaba de la Sierra a las ciudades, como sucedió con las trabajadoras domésticas “cama adentro”, menores de edad, que laboraban todos y cada uno de los días de la semana por un salario insuficiente y precario. Sobrevivió en el trato hacia la economía popular, que surgió de un masivo autoempleo de la población migrante que buscaba mayores oportunidades para ellos y las siguientes generaciones, pero que para el Perú oficial sería solamente una “economía informal” que disciplinar. Sobrevivió en la exclusión permanente de las mayorías indígenas de los espacios estatales de toma de decisión. Recordemos, por ejemplo, que el Perú tuvo que esperar hasta entrado el siglo XXI para que una mujer quechua se juramentara, en su lengua, como congresista de la República en el año 2011. Y que debió hacerlo bajo el hostigamiento retrógrado de una élite blanca que intentó impedirlo a toda costa, a la vista de todo el país.

Aunque el Perú se transformó profundamente bajo los efectos de la reforma agraria y las olas migratorias de la región andina hacia las ciudades –ocupando la población indígena numerosos espacios y configurando lo que hoy es una Lima provinciana y emergente–, el Estado siguió dando la espalda e invisibilizando a sus ciudadanos, mientras que el racismo siguió

Perú tuvo que esperar hasta entrado el siglo XXI para que una mujer quechua se juramentara, en su lengua, como congresista de la República en el año 2011

siendo el eje ordenador de una desigual distribución de los recursos y el poder.

Este trasfondo quedó en evidencia cuando Pedro Castillo, un profesor rural, parte de las Rondas Campesinas y dirigente sindical, ganó de manera sorpresiva las elecciones presidenciales del año 2021. Algunas frases, tomadas al azar de entre aquellas que inundaban por entonces las redes sociales –en particular Twitter, la preferida de los usuarios limeños– resultan bastante significativas: “Hay que meter a un campo de concentración a toda la sierra”; “hay que matar a todos los que votaron por el burro”; “los serranos no deberían votar”. Así era recibido un representante del otro Perú a las puertas de la presidencia. Estos mensajes de odio e incitación al genocidio, dejaban ya en claro que la élite peruana no toleraría el gobierno de Castillo ni el de sus simpatizantes y representados. Menos aún al ganar éste con un programa de hondas transformaciones, que enarbolaba como una de sus primeras y principales propuestas el cambio de la Constitución elaborada por la dictadura de Alberto Fujimori.

Pedro Castillo venía a representar aquel Perú serrano y rebelde, rasgos que potenciaron el desprecio de una élite blanca y urbana que finalmente logró torpedear la voluntad



popular, consumir un golpe de Estado, deponer al presidente legítimamente electo y poner un gobierno dictatorial en alianza con las Fuerzas Armadas y lo más retardatario de la clase política, expresado en el Congreso de la República. Por supuesto que no contaban con que esto alzaría a todo el sur del país, que vio conculcado sus derechos electorales.

LA “DEMOCRACIA” FUJIMORISTA

Paradójicamente, quienes el 6 de junio de 2021 perdieron las elecciones ante Pedro Castillo (coaligados en la segunda vuelta tras la candidatura de Keiko Fujimori, hija del ex dictador), volvieron al Palacio de gobierno el día 7 de diciembre de 2022, apenas siete meses después. Ese día, sectores de ultraderecha y el autodenominado “centro político”, consustanciado con los primeros en sus tentativas golpistas, votaron en el Parlamento la vacancia –es decir la destitución– de Pedro Castillo, quien con su errático intento de disolver el impopular Congreso terminó de convencer a un sector de cierta izquierda “democrática” que, profundamente desorientada, se terminó plegando al golpe parlamentario.

Todo sucedió en menos de dos horas. Castillo anunciando el cierre del Congreso; el ex presidente siendo apresado por la policía que coordinaba su propia escolta; el Congreso consumando el tan anhelado golpe y recibiendo a los altos mandos de las Fuerzas Armadas en los balcones del hemiciclo; y Dina Boluarte, la vicepresidenta que poco tiempo antes había asegurado que ella también se iría si vacaban al presidente, sonriendo y anunciando su

permanencia hasta el 2026, ahora a la cabeza del ejecutivo. Aquel torbellino de sucesos inauguraría un nuevo capítulo de la crisis política que desalojó en cinco años a cinco presidentes, siendo sólo dos de ellos elegidos por voto popular.

Esta crisis, que ha llevado a que las instituciones fundamentales de la democracia como el Parlamento lleguen al mínimo histórico de un 6 por ciento de aprobación –según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de marzo de 2023– emerge de las entrañas del modelo económico neoliberal y su sistema político. La implantación de este modelo en el Perú, protagonizada

por Fujimori en la década del noventa, significó la aplicación local de los puntos fundamentales del archiconocido «Consenso de Washington», como la privatización de empresas públicas estratégicas de la economía nacional, el aumento de los costes de la vida y la mercantilización de la salud y la educación, entre otros. A esto se suma la entrega de los recursos naturales –como los minerales–, la construcción de un Estado subsidiario del mercado y la total ausencia de derechos laborales. Toda esta pesada arquitectura fue sintetizada en la Constitución de 1993, firmada de puño y letra por el mismísimo dictador.

Pedro Castillo, con su errático intento de disolver el impopular Congreso, terminó de convencer a un sector de cierta izquierda “democrática” que se terminó plegando al golpe parlamentario



Pero la implementación del modelo neoliberal significó también la producción de un sistema político moldeado para representar los intereses del poder económico, y de una argolla, instalada en el Estado, que funcionaba con una puerta giratoria interminable en la que algunas personas turnaban sus periodos laborales entre los espacios de decisión en ministerios y las direcciones de las grandes corporaciones. Para esto fue preciso que la ley electoral y el sistema de partidos se cerraran cada vez más. Esto garantizó que quienes ejercían el poder político lo siguieran haciendo, para facilitar los intereses de los que acumulaban la riqueza en el país.

Este modelo que Fujimori cimentó sobrevivió a su propia derrota. Si bien el Perú vivió una transición post-dictadura a inicios del siglo XXI, liderada por sectores ilustrados del centro y la centroizquierda –que prometían entonces limpiar las instituciones y fundar una democracia real– el copamiento del Estado era ya tan profundo que lograba domesticar cualquier iniciativa que se desplazara del marco neoliberal, lo que terminó de volverlo obsoleto para la consideración de las grandes mayorías. Resulta revelador que esta transición, que nunca incluyó ni se propuso incorporar a los sectores indígenas como sujetos protagonistas, se haya visto truncada. Sin duda, este proceso de descomposición política se profundizó al llegar Castillo a la presidencia, dado que las élites neoliberales ya no tenían línea directa con el presidente y sus ministros para sancionar leyes o conseguir favores que siguieran patrimonializando al Estado.

El laberinto de esta crisis sin fin lleva el sello del fujimorismo, no sólo por la continuidad de los aspectos políticos y económicos, ni tan siquiera por la permanencia del apellido Fujimori en el centro de la escena política, sino también por la persistencia del relato maestro que el fujimorismo capilarizó en la sociedad peruana: nos referimos al «terruqueo», categoría específica y absolutamente peruana –pilar de las estrategias dominantes– que precisa ser explicada.

“YO TERRUQUEO, TÚ TERRUQUEAS, ÉL TERRUQUEA...”

El Perú vivió una historia de terror que atravesó las últimas dos décadas del siglo XX, con el conflicto armado interno iniciado en 1980, cuando el autodenominado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) comenzó la lucha armada. Vale decir que este recorte temporal corresponde al realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) durante su vigencia entre el año 2001 y 2003. Pero tanto en este ámbito como fuera de él, numerosos académicos y políticos reconocen una violencia política pre-existente que se expresaba desde años atrás en la represión y violación de los derechos humanos de la población peruana. No podemos olvidar que el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) fue parte de las operaciones del Plan Cóndor en la región, y que resultó condenado por sus nexos con este plan sistemático y regional de exterminio desplegado en América Latina, cuyos resultados inmediatos fueron innumerables crímenes de lesa humanidad.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE URGENTE



Pero aún así, nada sería comparable con lo que vendría después. Según la CVR, más de 69 mil peruanos y peruanas perdieron la vida en el conflicto armado interno. También de acuerdo a este informe, el Estado cometió violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada. Las principales víctimas eran justamente las poblaciones más vulnerables del país, como la población indígena, a la que se le negaba la inclusión en la democracia y las instituciones formales, a la vez que era masacrada en nombre de la “lucha contra el terrorismo”. De las 69 mil víctimas mencionadas, el 79 por ciento vivía en zonas rurales, el 56 por ciento se ocupaba en actividades agropecuarias, y el 75 por ciento era quechua hablante o tenía un idioma nativo como lengua materna.

Estas cifras del espanto demuestran a quiénes fue que el Perú oficial aplicó sus narrativas “antiterroristas”. Primero fueron los indígenas, los quechua hablantes, los

habitantes de la Sierra del Perú, así como los pobres en general. Luego fueron también los estudiantes y docentes de las universidades públicas y los migrantes internos en las ciudades. Estas narrativas, machacadas una y otra vez por la dictadura de Fujimori y amplificadas por los grandes medios de comunicación, construyeron la idea de que el “terrorista” nada valía, que no era una persona, y que por lo tanto carecía de derechos humanos. Por lo tanto, el “terrorista” era un sujeto pasible de ser detenido, torturado, desaparecido y ejecutado sin ningún motivo ni proceso judicial.

Así, el racismo secular entroncó con las políticas de terrorismo de Estado que perseguían a los más vulnerables. Este enfoque del Perú neoliberal sobrevivió a las formas dictatoriales y fue utilizado por los sucesores “democráticos” que sindicaban de «terroruco», es decir, de terrorista, a todo aquel que no se sometiese a su modelo económico y a su sistema político. Se «terruqueó»

en el conflicto de Bagua, en la Amazonía peruana, cuando más de 30 peruanos murieron, en un contexto en el que las comunidades de la selva se oponían a la depredación de su medio ambiente. Se «terruqueó» también a las comunidades de Cusco y Cajamarca que enfrentaban el extractivismo megaminero y defendían sus territorios.

Sin embargo, el «terruqueo» ha llegado ahora a unos niveles de paranoia y exasperación tan sólo vistos durante la época de la dictadura y el conflicto armado interno, bajo un régimen político que asesinó ya a varias decenas de peruanos y peruanas, entre ellos menores de edad, asesinados por disparos de bala en la cabeza. Cientos de personas han sido detenidas ilegalmente, hostigadas y golpeadas, entre ellas mujeres embarazadas, niños y ancianos. Todos ellos, de manera invariable, fueron definidos, antes de ser agredidos, como «terruco».

DESPERTAR CONSTITUYENTE

El huracán político desatado el 7 de diciembre inició un proceso de movilización sin parangón en la historia reciente del Perú. El golpe parlamentario se perpetró contra el presidente Pedro Castillo, que a pesar de la campaña mediática hegemónica y de contar con todos los poderes en su contra, mantenía una aprobación del 31 por ciento –datos del IEP de noviembre de 2022–, sostenida por ese electorado indígena con menos acceso a recursos al que la República colonial le había robado absolutamente todo. Esto primero despertó al sur del Perú y luego a los peruanos y peruanas más humildes de todo el país.

La protesta encabezada por el sur andino fue absolutamente política. La destitución de Castillo fue la gota que derramó el vaso: organizados en sus propias comunidades, primero a través de marchas espontáneas, y luego de movilizaciones muy bien planificadas, las ciudadanas y ciudadanos del sur se pusieron a la vanguardia de las exigencias de una salida de fondo a la crisis crónica que asola al país.

La primera demanda fue la renovación radical de quienes ocupan los principales cargos del Estado: la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso eran las banderas más habituales que se agitaban en plazas y carreteras. A ésta seguían otras demandas de aún mayor envergadura: aymaras, quechuas, amazónicos, chancas, el pueblo pobre, exigía la celebración de nuevas elecciones con un referéndum constituyente que abra paso a una Asamblea

Popular Constituyente que pueda, por fin, descorder el telón de las décadas de vigencia de la carta magna fujimorista.

Para fines de diciembre de 2022, la movilización, echando músculo, contaba ya con las carreteras del país bloqueadas en más de cien puntos, sin que hubiera un sólo día de tregua. La estrecha alianza entre el gobierno de Boluarte, las Fuerzas Armadas y la ultraderecha peruana tuvo consecuencias feroces. Sólo el día 15 de diciembre de 2022, diez personas resultaron asesinadas en Ayacucho, la mayoría de ellas por impacto de bala. El 9 de enero de este año, otras 18 personas fueron asesinadas en Puno, entre ellos tres menores de edad. En diciembre de 2022, Apurímac, la región del sur de donde proviene la propia Boluarte, ya contaba con seis asesinados. Al momento de escribir estas líneas, la cifra total de víctimas fatales –en permanente crecimiento– supera ya las seis decenas de personas. A las ejecuciones extrajudiciales le han acompañado múltiples violaciones sistemáticas a los derechos humanos y situaciones incompatibles con cualquier atisbo de democracia. Una de ellas fue el ingreso de fuerzas policiales al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la «Decana de América», en donde 200 personas –entre estudiantes y quienes se habían movilizadodesde las regiones– fueron detenidas. Sin fiscales ni abogados, una tanqueta rompió la puerta de la principal universidad pública del país. Ningún detenido –salvo uno y por motivos ajenos a las protestas– pudo ser señalado de algo más que ejercer su legítimo derecho a la protesta.

El Perú atraviesa una dictadura con un cada vez más invisible rostro civil: como sucedió bajo el gobierno de Fujimori, las víctimas siguen siendo en su mayoría quechua hablantes, aymaras, peruanos y peruanas humildes, quienes antes y después de muertos, como justificación y escarmiento, son «terruqueados». La movilización, con sus recodos y repliegues, no ha cesado; el tiempo político inaugurado con ella es irreversible. El modelo neoliberal que durante la pandemia puso al Perú en el ignominioso número uno de muertos por el Covid-19 en todo el mundo, parece ya desfondado. Hemos pasado de un país en crisis que se sostenía en una lógica destituyente a un momento constituyente en el Perú, donde la gente grita en las calles “sí se puede”, dejándolo absolutamente todo por salir a pelear. Hoy el pueblo peruano está luchando, y son las muchedumbres discriminadas las que están en la vanguardia y van por todo. Es duro y doloroso, pero también es esperanzador lo que sucede. Como siempre será la vida, será el futuro el que se abra paso para devolver la patria a sus dueños. ✂

El Chile que (todavía) no fue: retrospectiva sobre el proceso constituyente



Los últimos años de Chile se asemejan a una película apasionante con un final que no supo estar a la altura de su propio desarrollo. El corto pero vertiginoso ciclo que condujo del estallido social a la presidencia de Gabriel Boric, y de ahí al rechazo a una Constitución que debía enterrar al neoliberalismo allí donde el mundo lo vio nacer, impone un balance con un regusto amargo. ¿Qué sucedió con las pulsiones refundacionales de aquel Chile que quiso pero que (aún) no pudo ser?

Por **Héctor Testa Ferreira**

LO CONSTITUCIONAL, LO CONSTITUYENTE

Todo proceso constituyente implica, entre otras cosas, una medición de las correlaciones de fuerza y poder entre los distintos sectores políticos y sociales presentes en una sociedad determinada. Las fuerzas con vocación impugnadora del orden previo intentan lograr un otro equilibrio de poder, acorde a la nueva composición de la sociedad en sus distintas dimensiones (política, social, cultural, económica). Mientras que, en general, las actorías que han resultado dominantes en la época precedente, intentan contener los cambios que puedan derivar en una reformulación muy profunda del entramado jurídico y constitucional en el que ostentan un cierto predominio.

Por eso, los procesos de cambio constitucional se debaten entre los impulsos refundacionales de las fuerzas emergentes y las capacidades de resistencia que despliegan

los poderes dominantes. Cuando lo que predomina es el vector refundacional, hablamos de un «proceso constituyente», mientras que cuando lo que se impone es la continuidad, nos referimos más bien a un limitado «proceso constitucional». No se trata, por cierto, de fórmulas «puras», existiendo múltiples matices, posibilidades intermedias y cambios eventuales en la trayectoria histórica de cada proceso.

Analizado desde este marco conceptual, el proceso constitucional/constituyente en Chile se caracterizó más bien por un significativo dominio de los poderes constituidos, aunque no siempre esta característica se percibió con la misma fuerza. Hubo momentos en los que la importante fuerza destituyente/constituyente que se expresó a partir de la movilización del 25 de octubre de 2019 y de la cadena de eventos que le siguieron lograron, en parte, desbordar los condicionamientos impuestos sobre el proceso. Esto explica la sorpresa que generó la

contundente derrota que recibió, por ahora, la voluntad de refundar Chile, que supo suscitar en su momento el entusiasmo y la atención regional y mundial en relación al escenario abierto por la revuelta. Se proponen aquí algunas claves explicativas de aquella derrota, intentando comprender el desarrollo de las demandas que dieron impulso a aquella vocación transformadora, sintetizada en el anhelo popular de una nueva Constitución.

DEL «ACUERDO» A LA PANDEMIA

Como se sabe, el llamado «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» del 15 de noviembre de 2019, plasmó las condiciones fundamentales en las que se desarrolló el proceso de cambio constitucional, estableciendo, sobre todo a partir de la Ley 21.200, las reglas de funcionamiento de la Convención Constitucional. Las principales críticas a este acuerdo suscrito entre Chile Vamos (el partido del entonces presidente Sebastián Piñera) y diferentes sectores de la oposición, apuntaron a que los condicionamientos negociados ponían en grave riesgo la potencia refundacional del proceso –volviéndolo más constitucional que constituyente–, dando a las fuerzas conservadoras un alto grado de control sobre su trayectoria y sentido.

¿Cuáles fueron los principales puntos problemáticos? El primero fue la aceptación de la continuidad de Piñera en el poder, cuyo gobierno se encontraba en una acentuada crisis de legitimidad por las múltiples infracciones cometidas contra la normativa constitucional vigente, y por la grave y sistemática violación

a los derechos humanos desatada con el fin de reprimir la revuelta. El segundo fue el quórum de los dos tercios, que amenazaba con otorgar poder de veto a unas derechas con una muy marcada vocación obstruccionista. Pero también hubo otros temas, como la sujeción a los tratados internacionales suscritos por Chile, que podían limitar a futuro los cambios a un modelo económico neoliberal que también resultaba consagrado por los instrumentos internacionales. Otro

organizaciones sociales y a las fuerzas populares identificadas con las demandas de la revuelta mejores condiciones para incidir en el proceso. Ante todo, estas concesiones fueron otorgadas por las fuerzas conservadoras en función del convulso escenario provocado por el estallido social, que logró consolidar un ciclo de movilización que perduró con una fuerza significativa hasta marzo de 2020, momento en que comenzaron a sentirse en Chile los efectos de la pandemia.

En la elección de convencionales, las candidaturas y listas independientes, así como aquellas inclinadas hacia el campo progresista y de izquierdas, obtuvieron el que quizá sea su mejor resultado en toda la historia de Chile

punto, poco abordado en su momento, pero que terminó volviéndose crucial, fue la reinstalación del voto obligatorio para un plebiscito de salida que debía ratificar la nueva carta magna propuesta.

Estas condiciones fueron luego complementadas con otras reformas adicionales: la que instauró la paridad de género y las listas de independientes para la elección de convencionales (marzo de 2020) y la que estableció los escaños reservados para los pueblos indígenas (diciembre de 2020). Estas modificaciones posteriores al «Acuerdo» establecieron las condiciones de elegibilidad de los miembros del órgano rector, y otorgaron a las



El Covid-19 provocó varios efectos en la trayectoria del proceso. El primero fue la postergación del calendario inicialmente propuesto: de haberse seguido, todo el período de funcionamiento de la Convención se hubiera dado bajo el mandato presidencial de Piñera, y en simultáneo a las elecciones presidenciales del 2021. Esta circunstancia era de por sí anómala, si se considera que la mayoría de los ciclos constituyentes suelen darse bajo un gobierno favorable al proceso, o al menos bajo un gobierno provisorio surgido de la misma crisis.

Por otra parte, los efectos sociales, psicosociales y económicos de la pandemia agravaron las condiciones del descompuesto escenario institucional, profundizando las tendencias de desafección política propia de los 30 años de transición post-pinochetista. Esto se dio en el marco de un largo confinamiento, en condiciones de cierre y hasta de militarización del espacio público, lo que produjo un repliegue y desarticulación de la enorme fuerza social expresada en una multitud de asambleas, cabildos y espacios de organización colectiva desplegados durante la revuelta.

Pese a esto, el ciclo del estallido provocó unos resultados inéditos en las megaelecciones del 15 y 16 de mayo del 2021, en las que fueron elegidos quienes integrarían la Convención Constitucional, las alcaldías y concejalías municipales y las gobernaciones regionales. En la elección de convencionales, las candidaturas y listas independientes, así como aquellas inclinadas hacia el campo progresista y de izquierdas, obtuvieron el que quizá sea su mejor resultado en toda la historia de Chile, sólo comparable

con el obtenido –en condiciones y circunstancias muy diferentes– por el gobierno de la Unidad Popular en el ciclo 1970-1973.

Con todo, esta comparación debe ser relativizada, pues los grados de maduración política y organizativa distan de ser similares en uno y otro escenario. De hecho, en las elecciones municipales y regionales realizadas ese mismo día, los resultados se evidenciaron mucho más parecidos a los obtenidos en elecciones anteriores, con una leve mejora –pero no tan significativa como pudiera esperarse– en el desempeño de las fuerzas progresistas y de izquierda. Considerando el escenario en su conjunto, no hubo un giro general en las preferencias del electorado, sino un resultado favorable pero acotado a la elección de convencionales. Esta era una primera alerta sobre las reales posibilidades de transformación abiertas en aquellas peculiares condiciones políticas, organizativas y electorales.

DE LA CONVENCION A LAS PRESIDENCIALES

La Convención inició sus sesiones con una alta carga simbólica, apoyo ciudadano y elevadas expectativas de transformación constitucional. Pero el escenario fue cambiando de manera drástica en el transcurso de los meses siguientes, enfrentando la oposición del gobierno, la abrumadora mayoría de los medios de comunicación masiva y los principales partidos políticos del país. Por su parte, los movimientos y organizaciones sociales impulsores del estallido, así como la propia demanda popular constituyente, comenzaron a recorrer un largo período de reflujo y desmovilización. Como posibles causas puede señalarse: el



propio desgaste de la revuelta; los efectos de la pandemia; la delicada situación económica que volcó a amplias franjas sociales a desarrollar estrategias básicas de sobrevivencia; el desánimo provocado por el ciclo electoral de la segunda parte del 2021; y las propias carencias del mundo social organizado.

Como contraparte, los elementos que habilitaban una mirada optimista del proceso constituyente se fueron degradando o desvaneciendo, tanto por los errores propios de la Convención –o bien por actos puntuales de algunos de sus integrantes– como por el despliegue de una ofensiva de las fuerzas conservadoras que, asimilado el shock en que habían permanecido desde el estallido, habían comenzado a recomponerse de manera creciente.

Todo parece apuntar a que la participación del electorado de la ex Concertación y de las derechas determinó el resultado de las internas de la izquierda, lo que implicó la derrota de Daniel Jadue

A nivel electoral, esto se apreció con claridad en las elecciones legislativas y presidenciales, en particular durante la primera vuelta del 17 de noviembre de 2021. Allí, las fuerzas tradicionales del ciclo de la post-dictadura obtuvieron un resultado notoriamente mejor que en las constituyentes de mayo. Para las fuerzas más movilizadas y mejor organizadas, los resultados de las primarias de la coalición Apruebo Dignidad significaron un golpe

importante. Todo parece apuntar a que la participación del electorado de la ex Concertación y de las derechas determinó el resultado de las internas de la izquierda, lo que implicó la derrota de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y dirigente del Partido Comunista, cuya figura aparecía más nítidamente identificada con los anhelos de la revuelta.

Por otra parte, los criterios electorales aplicados no fueron los mismos que para la elección de constituyentes, sino que se tomaron como base las reglas de las elecciones parlamentarias. Esto impidió la reedición de listas con candidaturas independientes, centrales para explicar las elecciones a la Convención. Además, las fuerzas independientes y los movimientos sociales vivieron sucesivas crisis que pusieron de manifiesto su fragilidad, como se evidenció en la disgregación del espacio nucleado en torno a la Lista del Pueblo, articulación electoral de muy buen desempeño en las elecciones de constituyentes. Tampoco el espacio de los Movimientos Sociales Constituyentes pudo construir una referencia identificable por fuera de la Convención. Así, la incapacidad de las organizaciones sociales de articular una referencia electoral clara e identificada con las demandas de la revuelta, produjo un efecto regresivo crucial en las parlamentarias y en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

En definitiva, la primera vuelta dejó en primer lugar a José Antonio Kast, del Partido Republicano de Chile, una figura completamente refractaria al cambio constitucional. Mientras que Gabriel Boric, ganador de la interna del progresismo y la izquierda, obtuvo una cantidad de votos sólo levemente mayor a la que

había obtenido el conglomerado de Apruebo Dignidad cuatro meses antes. Como es sabido, ese cuadro se revirtió en la segunda vuelta del 19 de diciembre, cuando más de un millón de electores que no habían votado en la primera vuelta se alinearon, de forma mayoritaria, con la candidatura que apoyaba el «Apruebo». Aunque este tardío despertar electoral inclinó la balanza de las presidenciales, se produjo una vez decidida la composición regresiva del nuevo Congreso, muy favorable a las fuerzas conservadoras, neoliberales y reacias al cambio de la carta magna. Esto redundó en mayores condicionamientos para el ejecutivo y en un cuadro muy adverso para el tramo final del proceso constitucional.

Al interior de la Convención, este escenario influyó de manera significativa en afianzar la conducción relativa del espacio en manos del Frente Amplio y el Colectivo Socialista, espacio político que, dada la composición del órgano, desde un inicio funcionó como “bisagra” o centro político. Allí se verificaron también las anomalías del proceso chileno: es completamente inusual que, en simultáneo al ciclo constitucional se dé uno o varios procesos electorales –presidenciales o legislativos– se den una vez que el nuevo texto ya entró en vigencia. Esto dejó a la Convención en una situación de fragilidad frente a los poderes constituidos –determinante para explicar muchas de las falencias y flancos débiles del texto propuesto– y con un margen de acción notablemente menor que en otros procesos de la región.

El presidente Boric afianzó su alianza con sectores de la ex Concertación, con lo que se fue dando cada vez mayor peso a los elementos de moderación y consensualismo

UN GOBIERNO ELEGIDO Y UNA CONSTITUCIÓN RECHAZADA

Una vez asumido el gobierno en marzo del 2022, coincidentemente con la etapa final del proceso constitucional, el sector político encabezado por el presidente Boric afianzó su alianza con sectores de la ex Concertación (rebautizados ahora como “Socialismo Democrático”), con lo que se fue dando cada vez mayor peso a los elementos de moderación y consensualismo que ya eran visibles en la etapa anterior.

Ante los números de las encuestas que entre marzo y abril mostraban un *sorpasso* en favor del «Rechazo» –cuando la Convención comenzaba a votar las normas finales y el nuevo gobierno entraba en funciones– la oposición de derecha profundizó una campaña extraordinariamente eficaz contra el nuevo texto constitucional, a la que se sumaron actores significativos de la ex Concertación. Desplegada a través de los medios de comunicación dominantes y las redes sociales, no faltaron las tergiversaciones y las mentiras flagrantes sobre la propuesta de nueva Constitución. Ante este escenario, por acción u omisión, el gobierno decidió tomar distancia del proceso, manteniendo una fórmula que combinaba apoyo y lejanía.

Finalizado el 4 de julio el trabajo de la Convención, el campo del «Apruebo» afrontó dos meses de campaña sin las fuerzas, ni los medios, ni la movilización del campo popular. Finalmente, el plebiscito de salida del 4 de septiembre mostraría con toda claridad las carencias de un proceso político y social que careció de la articulación y de la conducción política necesaria para emprender un camino de transformaciones sustantivas.

Es más: la inclinación de las mayorías populares hacia el «Rechazo» acrecentaron en los meses siguientes las tendencias ya descritas, así como las dudas al interior del campo del «Apruebo» y del nuevo gobierno. La reinstalación del voto obligatorio para el plebiscito de salida fue determinante: sufragaron más de 13 millones de personas, es decir, 4 millones 650 mil ciudadanos más que en la primera vuelta presidencial de diciembre de 2021. La abrumadora mayoría de estos nuevos votantes se inclinaron hacia el «Rechazo». Desde entonces, la derecha y los sectores dominantes, envalentonados, se apropiaron con éxito del resultado y pusieron a la defensiva tanto al gobierno como a todo el arco de fuerzas con vocación transformadora.

Las energías movilizadas en octubre de 2019 y los tiempos subsiguientes, viven ahora, en repliegue, un presente confuso y lleno de interrogantes. Las tentativas de redactar una nueva carta magna se parecen ahora más a una reforma de la Constitución legada por la dictadura de Augusto Pinochet bajo el predominio de fuerzas neoliberales, que a un proceso constituyente que pueda marcar un punto de quiebre con la institucionalidad política y el modelo económico que, en descomposición, sigue derramando sus efectos negativos sobre la vida de las mayorías chilenas. Los conservadores parecen haber ganado de momento, y aspiran a cerrar “el problema constitucional” mediante un proceso férreamente controlado. Pero las causas profundas del estallido social siguen intactas, tanto o más presentes que antes, por lo que es sumamente dudoso que una “solución constitucional” planteada en estos términos pueda ofrecer resultados efectivos.

ASUNTOS PENDIENTES

En este escenario, corresponde señalar algunos puntos en pos de continuar los esfuerzos por transformar Chile, abordando ciertas falencias que determinan nuestro presente. En primer lugar es necesario asumir que estamos –y estaremos por algún tiempo– en momentos de reflujo, de repliegue, de rearme. Es normal que derrotas como la del plebiscito, y en general la de toda la trayectoria posterior a la revuelta, dejen sus secuelas. Cuánto tiempo transcurrirá para superar este clima político y social y este estado anímico colectivo es algo incierto, y dependerá de múltiples factores. En cuanto a las causas de esta derrota provisoria, hay algunas dimensiones que es altamente importante señalar.

La disputa comunicacional. El terreno de lo político se vuelve excesivamente desparejo con el desbalance habido en lo comunicacional. Es conocida la extrema concentración existente en el sistema de medios; a ello se suma la colonización por parte de los sectores dominantes de las redes sociales. Este cuestionamiento implica también debatir qué tipo de democracia es la realmente existente en estas condiciones, así como proponer una nueva regulación mediática. No es en vano destacar que, en este punto, el texto constitucional rechazado contenía avances parciales, pero que eran en esencia declarativos y quedaban supeditados a una futura legislación complementaria.

La construcción política y electoral. Una idea que ha permeado a las organizaciones sociales, es que pueden darse procesos de transformación social sin ocuparse centralmente de la organización política necesaria para comprender, encauzar, representar y conducir estos mismos procesos. Así, se concibe al cambio social como un fenómeno impulsado ante todo por movimientos “independientes”, carentes de una conducción política visible y articulada. Por el contrario, creemos que es imprescindible contar con organizaciones políticas, programas elaborados y referencias claras que, además, puedan competir de manera eficaz en los escenarios político-electorales.

Lo económico y material. En cuanto a los programas y proyectos políticos, se revela central la elaboración de prioridades, en particular la atención en torno a las necesidades económicas y materiales de las personas, familias y sectores sociales. Esto debiera ser algo obvio para los sectores identificados con las izquierdas, pero muchas veces ha quedado soslayado. Por eso resulta controvertible la consideración de una agenda exageradamente post-moderna, identitarista y/o liberal, situada en un campo de ideas y propuestas alejado de las preocupaciones sociales materiales. Y, en algunos casos, contraria a ciertos sentidos comunes mayoritarios en la población.

Por otro lado, hay temas claves que siguen pendientes y que no han sido profundizados, como la transición respecto de una matriz económica dependiente y del perfil primario exportador de nuestra economía, así como la necesidad de modificar el rol del Estado en este campo. En relación a esto, la crítica válida al extractivismo como forma extrema de nuestra formación económica debe ser complementada desde la mirada de una necesaria y prolongada transición productiva, que requerirá del control público y estatal sobre los bienes comunes. La cuestión de la soberanía en el marco de un proyecto nacional-popular de mayorías es una tarea que, a diferencia de otros países de la región, ha sido escasamente abordada en el caso chileno.

La cuestión regional y global.

Resulta notorio que, aún al interior de los sectores más organizados y politizados, hay un bajo nivel de conocimiento sobre nuestro presente histórico y nuestro contexto global, además de una serie de discrepancias muy puntuales entre los distintos sectores y organizaciones del campo del «Apruebo», que vuelve política e ideológicamente vulnerables a los sectores que han impulsado la agenda constituyente. En este sentido, el texto rechazado contenía una “cláusula latinoamericana”, inédita en nuestra historia constitucional, que buscaba poner el país a tono con el ciclo constituyente latinoamericano que propendió hacia la unidad e integración regional.

Como tema pendiente, la revisión de los tratados internacionales no obtuvo el apoyo necesario, siendo los acuerdos de libre comercio un pilar central en la configuración del modelo económico capitalista neoliberal. En este marco, fundamental para proyectar un orden jurídico que habilite una nueva política exterior, la cuestión de la vigencia del colonialismo –en todas sus dimensiones– es una temática relativamente subestimada en Chile, en lo que se advierte una influencia interna desmedida del eje Estados Unidos-Unión Europea. La apertura del país hacia América Latina y el Caribe, al bloque de los BRICS, a las políticas de articulación Sur-Sur y, en general, hacia el multipolarismo y los intentos de refundar el orden internacional, serán un campo absolutamente crucial en los tiempos venideros. ✂

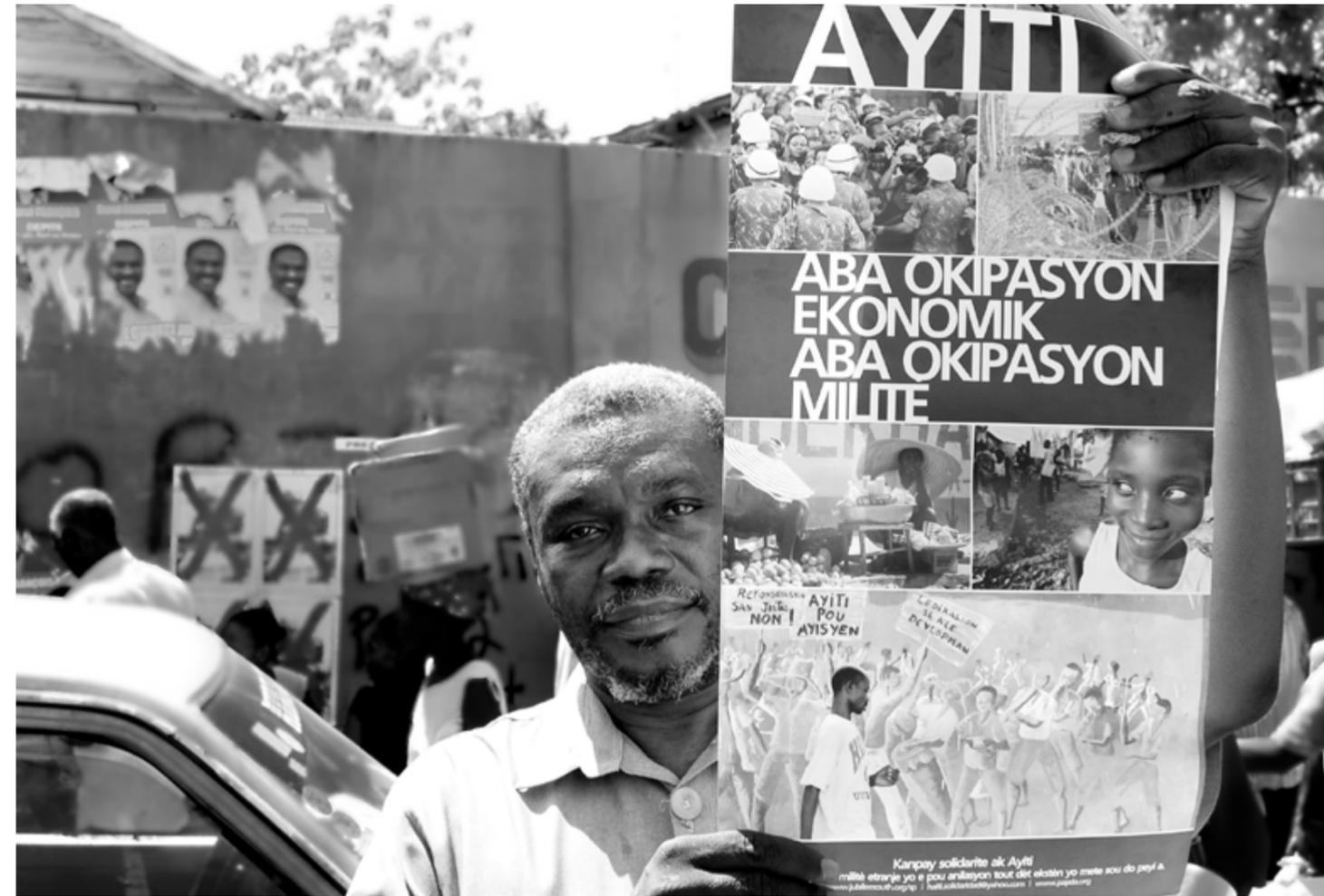




Haití, en su extremo límite

En 2010, Haití fue llevado a su extremo límite tras sufrir el terremoto más devastador de su historia, así como el refuerzo de la que terminaría siendo la más larga de las ocupaciones internacionales de los últimos 100 años. La “comunidad internacional” volvió entonces su mirada al país, para ratificar sus seculares prejuicios, incapaz de ver otra cosa que sufrimiento, violencia, degradación o miseria. Pero la lente amorosa del fotógrafo Federico Barreña pudo rasguñarle el alma a un pueblo que, puesto en un trance histórico, redobló su apuesta por la vida. A través de sus ciudades y sus campos, este ensayo visual recorre su altivo y a su manera hermoso cotidiano.

Por **Federico Barreña**









Más colaboración, menos confrontación

Aniquilación climática o extinción nuclear es una disyuntiva a la que nadie, en su sano juicio, se querría enfrentar. Pero, ¿sigue el mundo en sus cabales? El célebre lingüista Noam Chomsky y el reconocido periodista e historiador indio Vijay Prashad ofrecen una brújula para orientarse en la geopolítica global. Mientras la manecilla de los problemas apunta al Norte –Estados Unidos, Europa, la guerra y la OTAN– la de las soluciones parece apuntar a un Sur cada vez más integrado y regionalizado.

Por **Noam Chomsky** y **Vijay Prashad**

Traducción: **Débora Jeanette Arce Sposito**

Comencemos por lo evidente: la invasión rusa del territorio ucraniano terminará en algún momento, ya sea por la derrota de una de las partes o bien por un acuerdo diplomático. Al menos esta cuestión, lógica, debería estar fuera de debate. Pero la derrota de algún bando no está en este momento entre las posibilidades reales, ya que Occidente nunca permitiría que Ucrania sea derrotada por completo, y Rusia –una gran potencia nuclear–, introducirá en el conflicto sus armas nucleares antes de verse doblegada. Dado que

la derrota de uno u otro lado queda simplemente descartada, la única salida es la de un acuerdo diplomático. La alternativa a este acuerdo es, en pocas palabras, el suicidio colectivo, a medida que ambas partes siguen escalando el conflicto hasta un punto de no retorno.

Estados Unidos ha articulado una política que desea prolongar la guerra con el objetivo de “debilitar severamente a Rusia” –como el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y



otros altos funcionarios han afirmado explícitamente – y que pretende colocar a Ucrania en una posición de mayor fortaleza para unas eventuales negociaciones. Pero esta política de “debilitar a Rusia” a través de la escalada de la guerra en Ucrania no sólo es la posición de Estados Unidos, sino también la del Reino Unido y, con alguna variación, la de sus aliados europeos. Francia, como es habitual, objeta algunas cuestiones secundarias, pero a la hora de tomar posición no deja de alinearse con Washington.

ANIQUILACIÓN Y EXTINCIÓN

La abrumadora mayoría del mundo pide por su parte un acuerdo diplomático que ponga fin cuanto antes a los horrores de la guerra. Mientras más se demore será peor para Ucrania, quien ha perdido decenas de miles de soldados y ha sufrido grandes pérdidas económicas en todo el país (además de perder partes sustanciales de su territorio a manos de Rusia). Sin embargo, la severa destrucción del territorio ucraniano no se parece en nada a las secuelas dejadas por las guerras relámpago de Estados Unidos y el Reino Unido. Como vimos en la invasión a Irak en 2003 y a Libia en 2011, este tipo de ofensiva va directo a la yugular, demoliendo la infraestructura de energía, los medios de transporte y los sistemas de comunicación, es decir, todo aquello que permite el funcionamiento de una sociedad moderna. Ucrania, por su parte, tampoco ha sufrido el uso de armas ilegales como los proyectiles de uranio empobrecido y las bombas de fósforo blanco (utilizadas por Estados Unidos en Irak). Ningún Jefe de Estado de los países occidentales visitó Bagdad, la capital iraquí,

Por fuera de la burbuja de la propaganda occidental, gran parte del mundo ve el conflicto como una pulseada de poder entre los Estados Unidos y Rusia

mientras Estados Unidos y el Reino Unido la reducían a escombros. El doble rasero para medir estos conflictos es un hecho evidente.

Los amargos costos de la guerra no se limitan, por supuesto, a Ucrania y los invasores rusos. Millones se enfrentan al hambre a medida que se reducen los suministros de cereales y fertilizantes de la rica región del Mar Negro, y mientras los precios de los alimentos se disparan junto con las ganancias de un puñado de corporaciones multinacionales que dominan el sistema alimentario mundial. La «Iniciativa de Granos del Mar Negro» –organizada entre Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas en julio de 2022 por un plazo de 120 días, y luego prorrogada– ha transportado más de veinte millones de toneladas de cereales desde aquella región al resto del mundo. Aunque la cifra está muy por debajo de la que supo ser la producción habitual, la iniciativa es, como la llamó el Secretario General de la ONU, António Guterres, un “faro de esperanza”, una muestra de que es posible alcanzar un acuerdo más amplio que tienda hacia la paz.

Mucho antes de la guerra, la humanidad enfrentaba ya las acuciantes amenazas de la extinción –debido a la catástrofe ambiental– y de la aniquilación –acelerada por el colapso del régimen de regulación de

armas nucleares–. Colapso que fue inducido por la retirada unilateral de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 2002, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio en 2019 y el Tratado de Cielos Abiertos en 2020. El conflicto en Ucrania y las tensiones alrededor del Mar de la China Meridional explican los siguientes pasos de esta escalada, como la suspensión de la participación de Rusia en el Tercer Tratado de Reducción de Armas Estratégicas en febrero de 2023.

Por otro lado están los limitados pasos dados para abordar una catástrofe ambiental inminente. Los diluídos acuerdos sobre el cambio climático y los debilitados tratados de protección ambiental, no generan confianza en que podamos evitar la sentencia de muerte que pesa sobre la vida humana en la tierra. Incluso estas limitadas e inadecuadas estrategias se han revertido durante el transcurso de la guerra en Ucrania.

UNA TERRIBLE APUESTA

Se ha discutido poco, pero la postura de Estados Unidos y el Reino Unido entraña una peligrosísima apuesta sobre el destino de Ucrania y otros territorios. Ellos consideran que si el “demente” de Vladimir Putin se enfrenta a la derrota, hará sus maletas

en silencio y abandonará el poder. Y que por algún motivo no utilizará las armas nucleares que Rusia tiene listas, que podrían emular el tipo de guerra desatado por los norteamericanos y los británicos en Irak, o por los israelíes en Gaza, devastando así Ucrania, incluida Kiev, y las áreas occidentales que por ahora no se han llevado la peor parte de los combates.

Un momento de reflexión debería ser suficiente para revelar lo espantoso de esta apuesta. Es fácil comprender como, por fuera de la burbuja de la propaganda occidental, gran parte del mundo ve el conflicto como una pulseada de poder entre los Estados Unidos –a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)– y Rusia, con los ucranianos instrumentalizados como piezas de un tablero de ajedrez.

Por supuesto que esto no quita que haya ucranianos que hayan hecho la misma apuesta, aunque debe recordarse que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asumió el cargo en 2019 con una plataforma de paz que lo autorizaba a llegar a un acuerdo con Rusia

para evitar la escalada del conflicto. El anhelo de paz fue muy evidente en el país, incluso en 2014, cuando el entonces presidente Petró Poroshenko prometió “terminar la guerra en dos semanas”.

Es claro que Estados Unidos impuso a Ucrania su propia estrategia (la de “debilitar a Rusia”), enviando armas de manera masiva, bloqueando las vías diplomáticas y cimentando la ilusión de una victoria imposible. La gran potencia occidental ha influido de manera decisiva en el ánimo general dentro de Ucrania, reemplazando la esperanza de paz por la expectativa del interminable horror de la guerra.

Para casi todo el mundo la guerra es una calamidad, tanto mayor cuanto más se prolonga. Para casi todos. Otros, en cambio, están muy satisfechos con el conflicto. En las oficinas de las corporaciones de combustibles fósiles, de los fabricantes militares y de las instituciones financieras que los sustentan, la euforia parece no tener límites mientras disfrutan de ganancias récord. En octubre de 2022, el Pentágono dijo que estaba gastando 1.2 billones de dólares en contratos con fabricantes

de armas para reponer el stock utilizado en Ucrania. El anuncio hizo subir las acciones del conglomerado Northrop Grumman en un 40 por ciento y de la multinacional Lockheed Martin en un 37 por ciento. Debido al bloqueo del gas ruso en Europa, las compañías energéticas occidentales –Chevron, ExxonMobil, Shell, BP y TotalEnergies– tuvieron ganancias suplementarias por 134 mil millones de dólares. Las empresas petroleras y armamentísticas continúan elaborando sus nocivos productos, aumentando los riesgos para la vida humana organizada, al explotar nuevas regiones para la producción de combustibles fósiles con destino para la guerra.

LA OTAN GLOBAL

En la dimensión geopolítica, Washington ha registrado grandes avances. Antes de la escalada del conflicto contra Rusia –con Ucrania como punto álgido– y contra China –con Taiwán como zona de conflicto– la OTAN se había vuelto casi obsoleta. En 2006, Ivo Daalder y James Goldgeier escribieron un artículo en la revista Foreign Affairs reclamando por una «OTAN global», un proyecto que por entonces parecía completamente quijotesco, a pesar de que la alianza atlántica hubiera operado “fuera de área” en Afganistán. Cinco años después, en 2011, la OTAN llevó a cabo otra operación “fuera de área” contra Libia, cuyas acciones no justificaban invocar el Artículo 5 del tratado fundacional, que ordena a la alianza militar actuar en defensa de un estado miembro agredido.

Pero ni la aventura militar en Libia –que prácticamente destruyó el país– pudo darle a la OTAN, tras el fin de la Guerra Fría, el impulso vital

que necesitaba, ni pudo justificar las prerrogativas globales que ostenta en la actualidad. Fue la «Nueva Guerra Fría» contra China y Rusia la que permitió que Estados Unidos revitalizara a la alicaída alianza atlántica, cada vez más amenazada conforme Europa se integraba con Rusia en materia energética y con China en términos de inversión. La invasión de Putin a Ucrania revitalizó la OTAN, y le entregó Europa a Estados Unidos en bandeja de plata.

Desde la Segunda Guerra Mundial Washington ha tenido la preocupación de que Europa tomara un rumbo independiente, desarrollando sus muy naturales relaciones comerciales y de todo tipo con el Este. Una relación muy positiva y exitosa, como la describen algunos economistas, entre la Europa industrial avanzada –con epicentro en Alemania– y los ricos recursos naturales del este europeo, con el enorme y atrayente mercado chino. Estas oportunidades se hicieron tanto más realistas después del colapso de la Unión Soviética, cuando Mijaíl Gorbachov propuso una “casa común europea” desde Lisboa hasta Vladivostok, sin alianzas militares, sin vencedores ni vencidos, con un sendero común hacia un futuro socialdemócrata.

Pero eso no debía suceder. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, lanzó una nueva guerra fría al violar la promesa, firme e inequívoca, realizada por el presidente George H. W. Bush, quien se comprometió a que la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia el este de Alemania, a cambio de que Gorbachov habilitase su reunificación, y permitiese su incorporación a la OTAN, una alianza militar hostil (una concesión para



Desde la Segunda Guerra Mundial Washington ha tenido la preocupación de que Europa tomara un rumbo independiente, desarrollando sus muy naturales relaciones comerciales y de todo tipo con el Este

nada insignificante considerando la historia de ambos bloques). Clinton traicionó el acuerdo hecho por el Secretario de Estado de los EE.UU., James Baker, y por el último Ministro de Relaciones Exteriores soviético, Eduard Shevardnadze, el 9 de febrero de 1990. Acuerdo que ha sido gravemente tergiversado por los comentaristas occidentales, pero que fue de hecho un pacto firme y carente de ambigüedades, como se desprende de su propio texto. La parte soviética demandaba entonces: “Por supuesto, tendría que haber garantías férreas de que la jurisdicción de la OTAN o de sus fuerzas no se moverán hacia el este. Y esto tendría que hacerse de una

manera que satisfaga a los vecinos de Alemania del este”. La respuesta de Baker a Gorbachov no fue menos clara: “Entendemos la necesidad de garantías para los países del este. Si mantenemos la presencia en una Alemania que sea parte de la OTAN, la jurisdicción de la OTAN y de las fuerzas de la OTAN no se extenderá ni una pulgada hacia el este”.

Pero la alianza atlántica comenzó su imparable marcha oriental con la absorción de la República Checa, Hungría y Polonia en 1999; de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia en 2004; de Albania y Croacia en 2009; de Montenegro en 2017; y,



finalmente, de Macedonia del Norte en 2020. En la Cumbre de Bucarest, en abril de 2008, anulando las objeciones de Francia y Alemania bajo la presión de Estados Unidos, los estados miembros de la OTAN acordaron que Georgia y Ucrania serían parte de la alianza en el futuro. Pocos meses después, en agosto, Georgia y Rusia libraron una guerra por las áreas separatistas de mayoría rusa de Abjasia y Osetia del Sur, una guerra que fue el preludio del conflicto en torno a Ucrania.

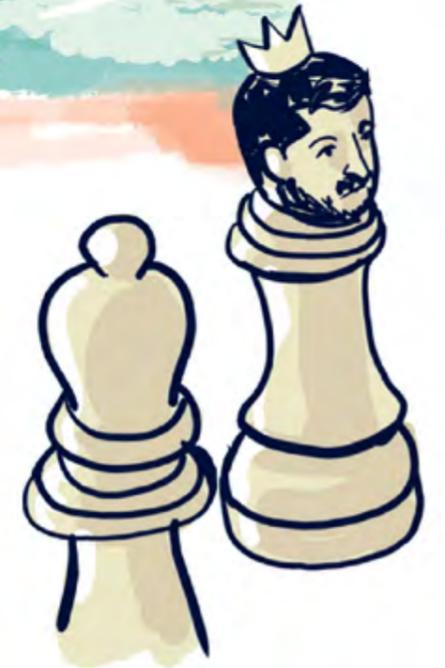
El presidente de Rusia hizo sonar la alarma en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, cuando dijo que el mundo no necesita un “amo único” y pidió garantías de seguridad para su país. Estos puntos fueron ignorados, y Putin –que había sido hasta entonces un aliado leal de Occidente– fue denigrado por la “audacia” de cuestionar el liderazgo estadounidense. Así fue que Putin, considerado por George W. Bush y Tony Blair como un «gran

demócrata» antes del 2007, se convirtió luego en el «gran dictador».

La retirada unilateral de Estados Unidos de los tratados sobre armas nucleares sugirió a los rusos que Occidente podría no solo ampliar –la OTAN, sino colocar armamento letal a corta distancia de las principales ciudades del país, que no serían ya capaces de protegerse a sí mismas. Este constante camino hacia la confrontación –incluyendo la intromisión de Estados Unidos en la política interna de Ucrania desde hace más de una década– condujo directamente al espectáculo de terror actual, que continuará agravándose si no hay una voluntad real de ponerle fin.

LA «NUEVA GUERRA FRÍA»

Con Europa en su bolsillo, Estados Unidos ha podido –al menos por ahora– extender la alianza atlántica a la región del Indo-Pacífico, alistando a la OTAN para



su confrontación con China, que podría llegar a ser aún más siniestra que los terribles sucesos en Europa. El proyecto norteamericano para el Indo-Pacífico incluye la creación de alianzas militares alrededor de China (como el llamado Quad, con Australia, India, y Japón) y la creación de la «OTAN Plus» (que incluye a Australia, Israel, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur).

Los neoconservadores que dirigen la política exterior del presidente estadounidense Joe Biden han intensificado esta confrontación contra China. En términos oficiales, China ahora está “rodeada” por “estados centinela”, provistos por Estados Unidos con armas de precisión que apuntan al gigante asiático, y respaldados por maniobras navales masivas realizadas en el Océano Pacífico. Los B-52 con capacidad nuclear ahora tienen base en la ciudad australiana de Darwin y en la isla de Guam, a poca distancia de China.

Taiwán es el principal foco de conflicto. A fines de febrero de 2023, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., Michael McCaul, dijo a ABC News que “Hoy es Ucrania. Mañana será Taiwán”. Durante cincuenta años, la política de «Una sola China» ha mantenido la paz en Taiwán, un logro para nada insignificante en lo referente a los asuntos internacionales. Paz que ahora se encuentra seriamente amenazada, principalmente por algunas iniciativas estadounidenses altamente provocativas que ya nos resultan familiares: fue el caso de la visita de los funcionarios estadounidenses que encabezó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, seguida por otros actos imprudentes de la misma naturaleza. La Ley de Política de

Taiwán (2021-2022), aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, pide que se otorgue a Taiwán el estatus de aliado no perteneciente a la OTAN, sin restricciones diplomáticas de ningún tipo, junto con el envío de una ayuda militar mayor y del entrenamiento conjunto de las fuerzas militares norteamericanas y taiwanesas, en un paralelismo inquietante con las políticas seguidas en Ucrania en la última década.

Lo más grave de todo es que el equipo de Biden ha declarado una «guerra económica» contra China –como acertadamente la llama la prensa financiera internacional– diseñada para impedir el desarrollo tecnológico del país asiático. La guerra comercial, así como la militarización de dicha guerra, no se debe a una “agresión china”, sino que se explica por el fracaso de las empresas estadounidenses a la hora de competir con sus homólogas chinas. En lugar de permitir la “libre” competencia, el gobierno de EE.UU. ha intervenido aplicando sanciones contra estos sectores y contra ciertas empresas específicas como Huawei. Como sucede con otras medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos contra terceros países –por ejemplo Cuba, Venezuela e Irán– otros estados y empresas se ven obligados a observarlas de manera forzosa. Aunque no les guste, es lo que les toca, dado que resulta peligroso desafiar a la gran potencia occidental.

Esta política dirigida hacia China implica un nuevo golpe para Europa, que ya se enfrenta a fenómenos de desindustrialización por acatar las exigencias de EE.UU. de reducir las compras de energía a Rusia y de poner freno a las inversiones provenientes de China. Países Bajos,

por ejemplo, tiene la industria de fabricación de semiconductores más grande del mundo, un componente ineludible de las industrias más avanzadas. Abstenerse, por las amenazas de Estados Unidos, del rico mercado chino, no representaría un golpe pequeño para los europeos. Lo mismo vale para la empresa Samsung, de Corea del Sur,

de la guerra comercial contra China, en noviembre de 2020 quince países se reunieron en Hanoi (Vietnam) para formalizar su incorporación a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), creando así el bloque comercial más grande de la historia, anclado decididamente en la economía china. Estados Unidos no está

Rusia, India, China y Sudáfrica) desempeña un papel cada vez más importante en los asuntos internacionales (inicialmente en las relaciones comerciales, pero cada vez más, también, en el mundo de la política).

Todo lo que estamos discutiendo tiene un aire demencial: las sociedades parecen haber enloquecido, mientras corren en estampida hacia el suicidio colectivo. Hay una razón por la cual las manecillas del «Reloj del Apocalipsis» se adelantaron a 90 segundos de la medianoche del mundo. Estamos corriendo hacia la destrucción del medio ambiente que sustenta la vida. La guerra nuclear terminal es una amenaza creciente en Europa y Asia. No podemos descartar que emerjan nuevas pandemias, lo que haría que la guerra parezca un picnic en el bosque. Ninguno de estos peligros letales tiene límites. Las grandes potencias encontrarán formas de acomodarse y cooperar por el bien común, o colapsarán todas juntas. Al comienzo de la pandemia, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a los países del mundo a ser más colaborativos y menos conflictivos. Los problemas comunes necesitan soluciones comunes, dijo. Fueron palabras sabias, y necesitan ser escuchadas. ✂

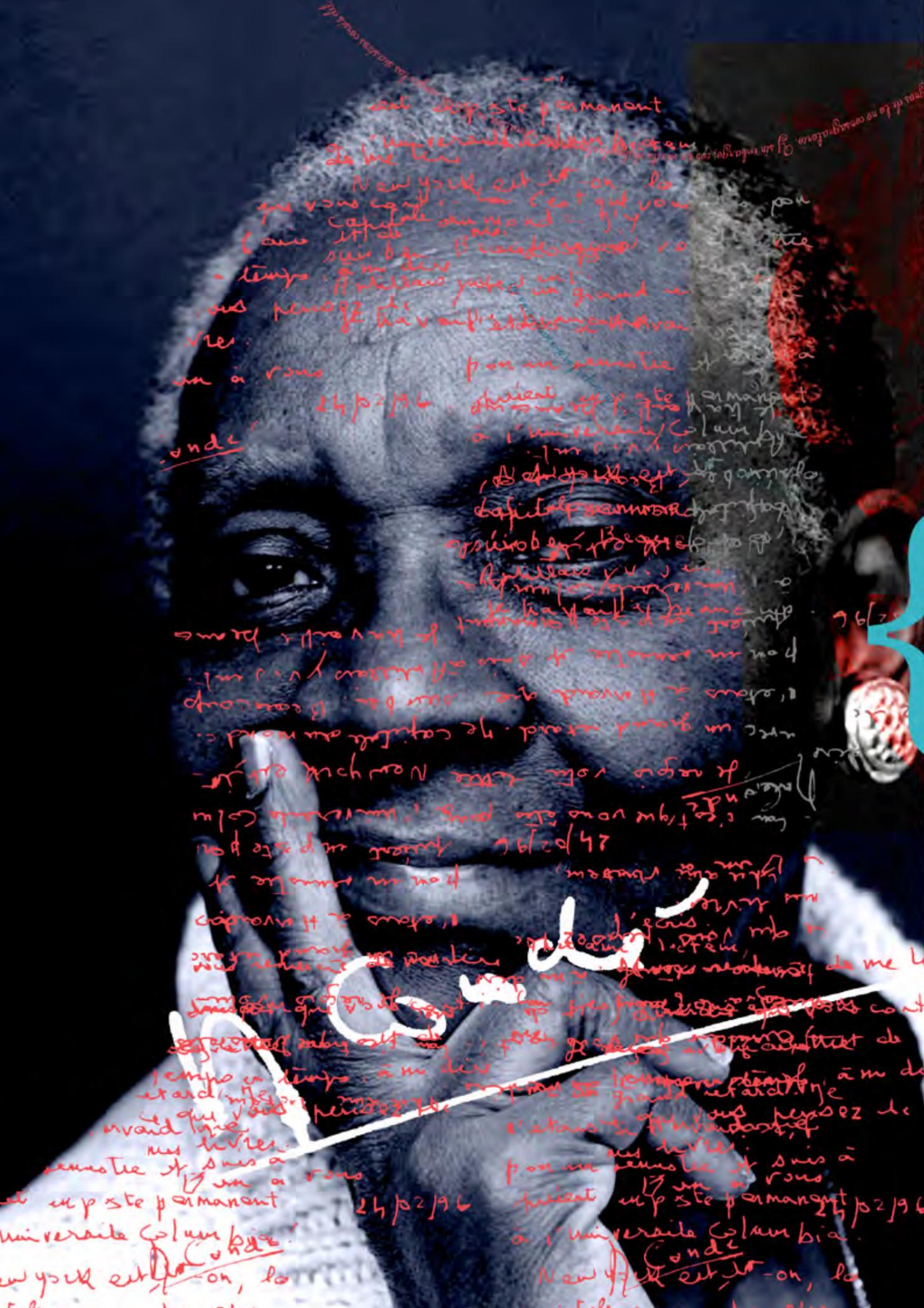
La mayor parte del mundo se está moviendo hacia un orden mundial que “no tiene un solo amo”; un orden en donde el regionalismo ha llegado a ser una fuerza institucional efectiva y en donde el regionalismo ampliado desempeña un papel cada vez más importante

y para las industrias más avanzadas de Japón. Cuánto tiempo estarán dispuestos los países y compañías europeas a soportar esta situación, es una de las muchas incertidumbres del turbulento escenario global.

Mientras tanto, China continúa con sus préstamos globales y con sus proyectos de inversión y desarrollo, incorporando a Eurasia, extendiéndose a África, Medio Oriente e incluso a lo que Estados Unidos considera su “patio trasero”: América Latina y el Caribe. La «Nueva Ruta de la Seda» –que cumple ya una década– y los préstamos concedidos por el Banco Popular de China en monedas locales, se unen al hecho de que China es ahora el principal socio comercial de la mayoría de los países del hemisferio sur. A pesar de la pandemia y

en la RCEP, mientras que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica ya no existe.

Hay un famoso poema del escritor inglés Hilaire Belloc que retrata el apogeo del Imperio Británico: “Pase lo que pase, nosotros tenemos la ametralladora Maxim, y ellos no”. Pero las armas no son suficientes para detener el desarrollo de China y su influencia expansiva, y no parece probable que los esfuerzos por estrangular su economía tengan éxito alguno. La mayor parte del mundo se está moviendo hacia un orden mundial que “no tiene un solo amo”; un orden en donde el regionalismo ha llegado a ser una fuerza institucional efectiva y en donde el regionalismo ampliado (a través de alianzas como el BRICS entre Brasil,



La lengua Maryse Condé:

sobre «Corazón que ríe, corazón que llora»

Negra, mujer, feminista, caribeña: Maryse Condé parece tener todos los signos de lo no consagratorio. Y sin embargo, con un mérito desbordante, su obra narrativa no deja de romper los sucesivos corsés del paternalismo colonial, la desidia latinoamericana y la dispersión caribeña. Habiendo en las Antillas tantas lenguas para elegir, la guadalupeña no tuvo otra opción que inventarse la suya propia.

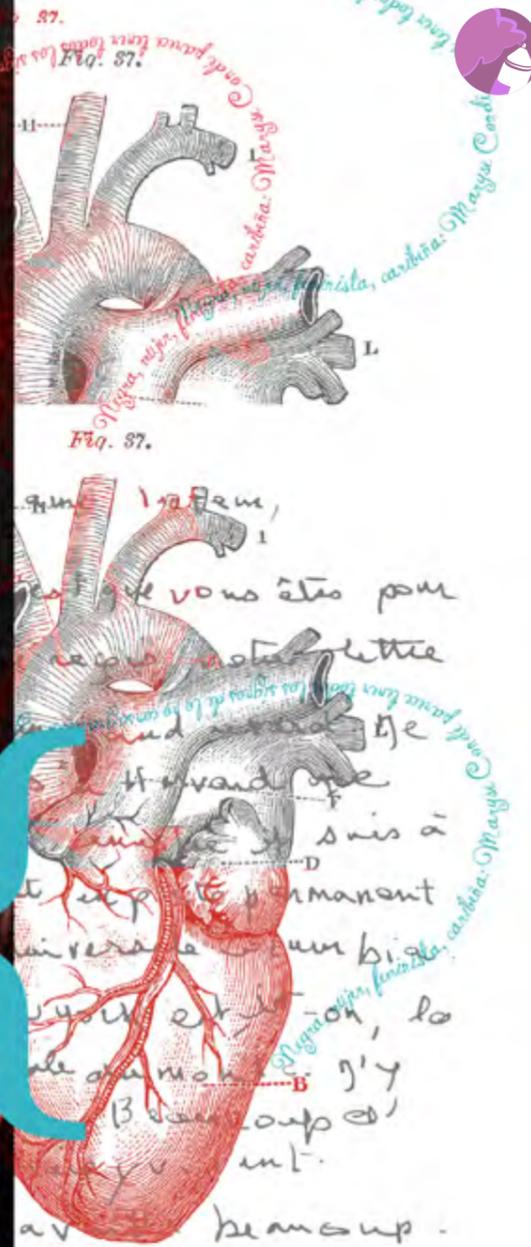
Por **Giordana García Sojo**

El escándalo sexual que atravesó a la Academia sueca del Nobel en 2018 derivó en su cancelación, luego de 70 años de entrega ininterrumpida. Una situación bochornosa para un espacio del más encumbrado elitismo, que sirvió siempre de sacrosanta vara legitimadora del canon literario occidental. En vista del vacío que se generó en el *mainstream* editorial de alta gama, surgió el Nobel "alternativo" en el año 2018, cuya galardonada fue la escritora guadalupeña Maryse Condé, nacida en 1937, y que cuenta con una obra y trayectoria de peso y largo aliento.

Una podría preguntarse por qué Condé fue premiada en esta especie de tibia interín del premio y no antes, o por qué no fue ratificada

después, cuando ya el bochorno se coló bajo las alfombras, y los monóculos se erigieron de nuevo en visionarios instrumentos de legitimación. En fin, esa rendija "alternativa" de la Academia sueca permitió que se diera a conocer una voz poderosísima, apenas traducida a otras lenguas luego de más de 40 años de trabajo literario, cuyos orígenes llevan directamente a uno de los mayores oprobios históricos, aún vigentes en el siglo XXI: el colonialismo.

Maryse Condé nació en las llamadas Antillas, regiones de "ultramar", "conquistadas" por reinos europeos, las que se convirtieron en preseas de los conflictos internos entre españoles, ingleses, franceses y



otros imperios coloniales. Producto de estos juegos de tronos, su isla fue entonces, y sigue siéndolo hoy, una colonia francesa. De Guadalupe, enmascarada como un “departamento francés de ultramar”, es nuestra autora, quien hace de este hecho, o más bien, de esta procedencia geocultural, su encarnadura experiencial, y su materia de creación.

Esta explicación puede resultarnos innecesaria y hasta pueril a muchos de quienes nacimos y vivimos en América Latina y el Caribe, pero es sorprendente cómo se desconoce hoy en día en las “metrópolis” europeas la existencia no solo de “islas de ultramar” que son colonias europeas o estadounidenses (en todos los continentes), si no de su historia y de su gente. Condé, guadalupeña, comenzó a ser traducida al español y al inglés luego de ganarse el mencionado “Nobel alternativo”. Desde entonces ha comenzado a ser mucho más leída y reconocida, pues en Francia, a pesar de que allí sus novelas podían ser comprendidas, apenas si era mencionada. Hoy, la autora afirma que no escribe en francés ni en la lengua “criolla” elaborada por las poblaciones esclavizadas: ella escribe “en Maryse Condé”, una lengua propia para narrar-se.

De Guadalupe, enmascarada como un “departamento francés de ultramar”, es nuestra autora, quien hace de esta procedencia geocultural, su encarnadura experiencial, y su materia de creación

La vida de la autora ha estado enmarcada en una fuerte contradicción indentitaria, propia de la superposición de mandatos culturales y de resistencias, de balancines entre la alta y aspirada cultura francesa, la negritud africana del origen, y el desenvolvimiento cotidiano de la criollidad guadalupeña.

Toda su obra da cuenta de ello, y de una contradicción más: ser mujer en un mundo donde la educación y las luces estaban resguardados para y por los hombres. Sin embargo, Condé no se asume feminista, pero vaya que en sus obras se ejerce la crítica y la deconstrucción feminista, atravesada de cabo a rabo de una gran honestidad experiencial.

He escrito varias veces esta palabra: *experiencial*, y es que en la obra de Condé la vida que le ha tocado como niña, madre, mujer, escritora, trabajadora, amante y militante, es parte fundamental y constitutiva de una forma única de narrar, una poética si se quiere, una estética, una lengua: la lengua Maryse Condé.



«CORAZÓN QUE RÍE, CORAZÓN QUE LLORA»: EL DESEO ES UN LUGAR POLÍTICO

Esta novela es sin duda un relato autobiográfico; de allí la claridad de la fuente experiencial en la ficción de Condé, que además escribió una segunda parte titulada «La vida sin maquillaje». «Corazón que ríe...» trata de la niña Maryse, creciendo en Guadalupe, en el seno de una familia aburguesada de negros que aspiran a ser parte de la sociedad francesa, esto es, del canon de la metrópoli –por supuesto blanco y occidental–. Los padres de Maryse forjaron un marco riguroso de formación para que sus hijos fuesen lo menos “negros” posible; lo menos guadalupeños o criollos y, por supuesto, lo menos africanos.

La novela puede catalogarse como *bildungsroman* o relato de aprendizaje, aunque a ciencia cierta se trata en este caso de un des-aprendizaje de la pesada imposición materno-paterno-societal de una clase, una lengua y un imaginario

La novela puede catalogarse como *bildungsroman* o relato de aprendizaje, aunque a ciencia cierta se trata en este caso de un des-aprendizaje de la pesada imposición materno-paterno-societal de una clase, una lengua y un imaginario ajeno al experimentado en la cotidianidad y en el cuerpo de la niña. Escribe Condé: “De todos modos, acertaba a entrever, más allá de la celda a la

que todos me destinaban, rendijas por las que conseguiría colarme. Cuando, sin aliento, llegué a la Rue Alexandre Isaac, mi madre acechaba en el salón. ¿Qué bicho me había picado, corriendo como una loca a pleno sol? ¿Es que no me veía lo suficientemente fea y negra? Parecía una africana”.

La maestría narrativa de Condé logra que leamos una experiencia tan singular y acotada a una localidad y sus vicisitudes identitarias como un relato universal, capaz de hacernos sentir la indignación de la denuncia anticolonial de fondo; sentimos con ella incluso la desilusión de no ser parte del modelo de cosas ansiado. Sentimos con ella el deseo y el sopor de la alienación racial y cultural, desmenuzada por Frantz Fanon en el clásico libro «Piel negra, máscaras blancas».

En un episodio que describe el deseo de encajar en la escuela, la narradora nos cuenta cómo, en una estrategia inversa de supervivencia, la niña Maryse cumplía su rol, mitad prodigio, mitad fenómeno: “No daba yo abasto con tantas invitaciones para comer, para pasar el fin de semana en la casa de campo de sus padres. Solía aceptar. Sin embargo, de vuelta a la residencia, era bien consciente de haber estado interpretando el papel de la negrita virtuosa. No, no venía de ningún campo de caña. Sí, mis padres eran gente de bien. Sí. En mi familia siempre hablábamos en francés”.

Fanon y Aimé Césaire se atisban en el derrotero intelectual que va fraguando Maryse luego de un doloroso proceso de deconstrucción. Sin embargo, recordemos que la autora escribe en *lengua Maryse Condé*, y si bien se rastrean influencias

fundamentales, en todo momento la originalidad de su pensamiento se desprende en el relato de la experiencia de esta niña, que debe debatirse con luces propias entre varios mundos e ideales. Otro de los valores de la obra es que la voz narrativa del personaje infantil está construida con tal grado de verosimilitud y fluidez que nos identificamos con ella de inmediato, a la par de comprender la superposición de otra voz adulta que reflexiona paralelamente, sin rupturas y de manera armónica.

La condición de niña, hembra, mujer, hija (y probablemente madre), es sustancial al recorrido experiencial del personaje Maryse. En una escena memorable en que asiste por accidente a un parto difícil en una casa muy pobre a donde fueron de visita, su madre –uno de los personajes más duros de la novela– se deshace de toda la parafernalia de clase y acude cual nodriza a apoyar el alumbramiento, ante los ojos atónitos de una niña que nunca había visto a su madre en ningún menester que no requiriera altivez. Esta es una de las relaciones más difíciles y puntillosas de la historia. Si bien Maryse tendrá en su hermano Sandrino un modelo de rebeldía y hambre de conocimiento, éste apenas es mencionado; el resto de la familia, en cambio, se construye como una presencia constante, específicamente su madre, quien será el receptáculo de todo el miedo al rechazo social y a la expulsión.

Sin embargo, a medida que la niña crece, se acerca a una comprensión compasiva de sus padres, quienes para sobrevivir a un pasado de vejaciones y rechazos, quisieron transformar a toda costa a sus hijos en otra posibilidad de clase, raza y procedencia. Se comprende, mientras se avanza en la lectura, que la niña Maryse será una gran intelectual. Su inteligencia y voracidad lectora está presente, sin mengua de la humanidad de una niña acorralada y presa de múltiples imposiciones. En alguna parte se refiere a las clases de *Madame Épée*, quien se burlaba de ella y de otra niña de procedencia africana: “...las clases de francés se convirtieron en zoológicos donde la guardiana nos exhibía cual bestias enjauladas. Circos donde la domadora nos forzaba a pasar por el aro. Villon, Du Bellay, Chateaubriand, Lamartine, toda la literatura francesa se convirtió en mero instrumento de tortura”.

Al terminar la primaria, Maryse se irá a Francia; aún siendo menor de edad estudiará en La Sorbona, y allí son otras las decepciones y nuevas búsquedas que se le presentarán, y que ella misma trazará, siempre entrelazadas con la inconformidad ante un estado de cosas precario, que debe cambiarse y, para ello, comprenderse.

Finalmente, el libro deja un deseo tremendo de continuar. Está narrado a través de capítulos breves, redondos cada uno en su anécdota y forma, pero hilvanados en el trasunto del tiempo de crecimiento y paso a la juventud. De alguna forma la autora nos cuenta cómo deconstruyó y reconstruyó un compendio de valores, de acuerdo con su experiencia de vida física y espiritual, anclada en un aquí y un ahora muy concretos, pero rebozados de deseos. ✂



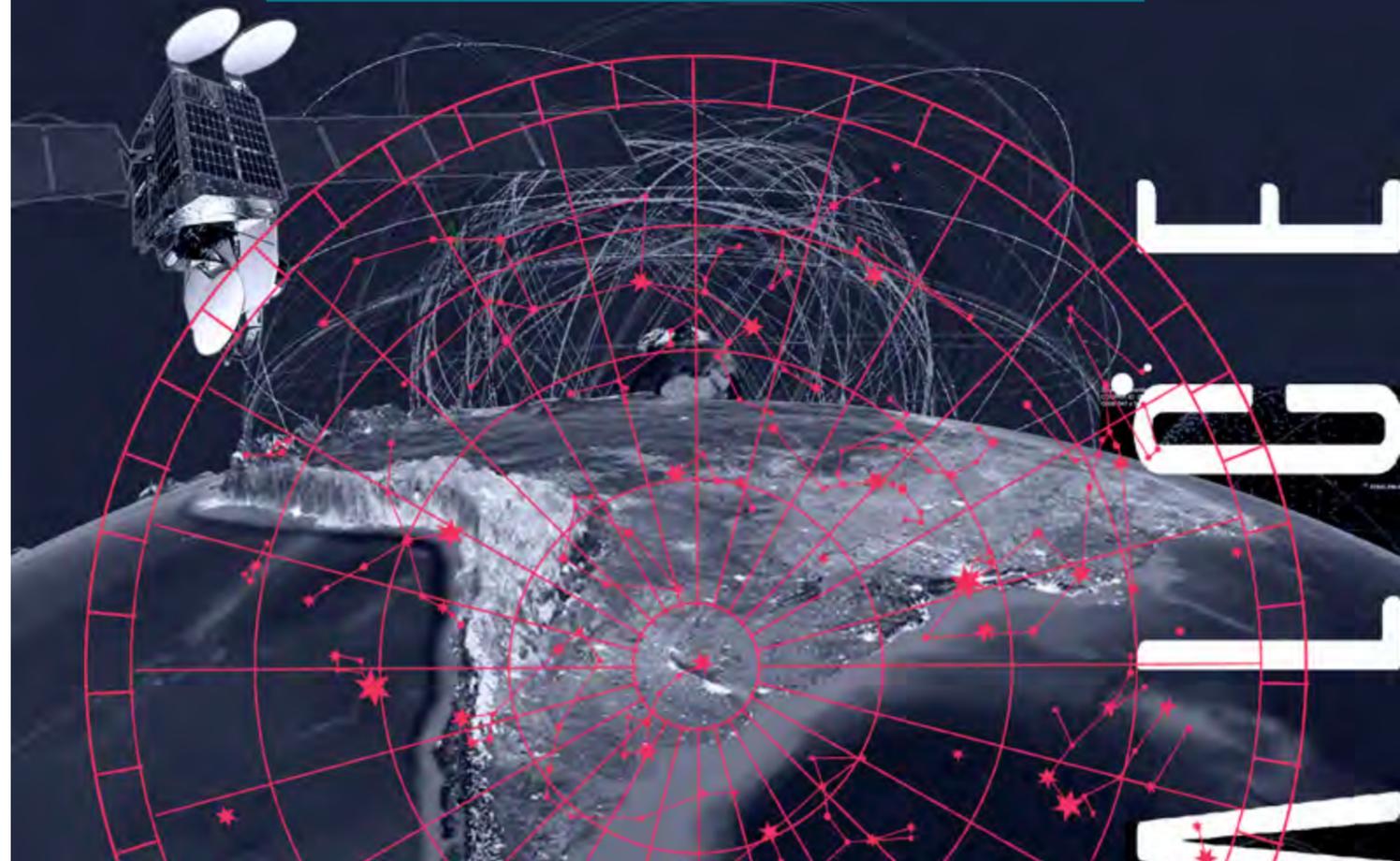
FICHA
Corazón que ríe, corazón que llora
Maryse Condé
Impedimenta, 2019
Traducción al español:
Martha Asunción Alonso

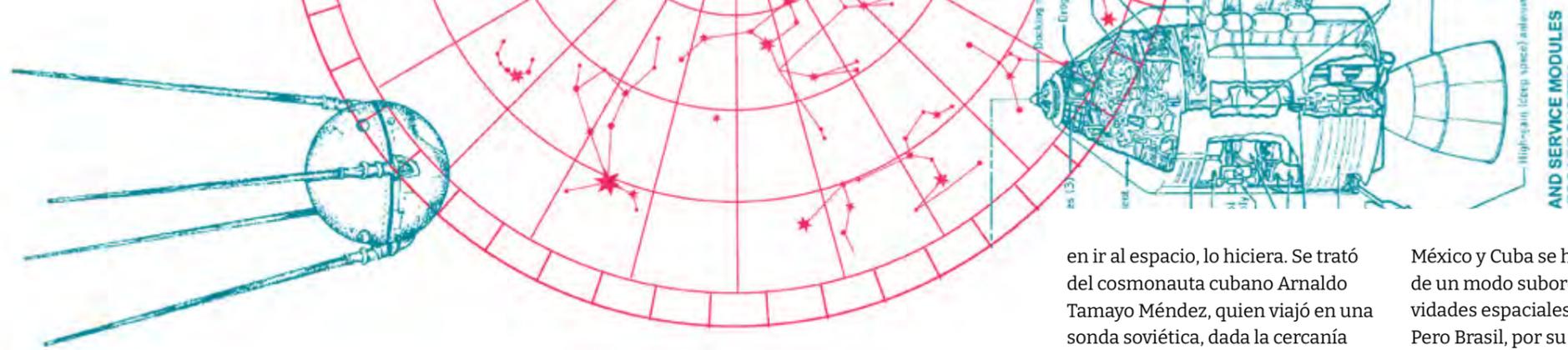


¿Qué tan lejos están América Latina y el Caribe de las estrellas?

Tras décadas de adormecimiento de la discreta carrera espacial regional, el sueño de acariciar las estrellas pareció levantar vuelo con la propuesta de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. ALCE busca aportar a una integración dura, científico tecnológica, que sobreviva a la retórica y el optimismo episódico de los cónclaves diplomáticos. ¿Podrá nuestra región despegar de forma autónoma?

Por **Daniel Vizquete-Sandoval**





Desde 2020, varios países de América Latina y el Caribe se encuentran trabajando en la constitución de una agencia espacial regional. Aunque las voluntades de varios gobiernos se han alineado para dar a luz a esta agencia, el proceso de constitución jurídica y las primeras operaciones de la agencia avanzan lento. La heterogeneidad de las respectivas capacidades complica el asunto en una región que cuenta con múltiples mecanismos de integración, pero con pocas experiencias en materia científico tecnológica. Así, han pasado ya más de dos años sin que se haya completado su constitución oficial.

En las líneas que siguen realizaremos una contextualización de la exploración espacial actual, así como de sus antecedentes regionales. A continuación, haremos un breve recorrido de la historia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entidad que promueve la creación de la agencia en cuestión. Enseguida, haremos un repaso de los principales hitos del proceso de constitución de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). Finalmente, plantearemos algunos escenarios posibles sobre el futuro de la ALCE en la región.

¿LAS ESTRELLAS BRILLAN MÁS FUERTE HOY?

La emergencia del mundo multipolar y la explosión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), sentaron

La emergencia del mundo multipolar y la explosión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), sentaron las bases para un nuevo momento espacial. Lejos están los días en que la «conquista del espacio» era un aspecto más de la carrera armamentística y cultural entre dos superpotencias

las bases para un nuevo momento espacial. Lejos están los días en que la «conquista del espacio» era un aspecto más de la carrera armamentística y cultural entre dos superpotencias: la ex Unión Soviética y los Estados Unidos. Hoy, la exploración espacial no es un asunto limitado a dos países, ni tampoco una competencia exclusiva de los Estados Unidos. Es un ámbito complejo en el que compiten y colaboran tanto agencias espaciales de países de todas las regiones del mundo –e incluso internacionales como la Agencia Espacial Europea–, con actores empresariales como *start ups*, grandes empresas tecnológicas y consorcios público-privados de todo el mundo.

El «New Space», según la definición de Arreola Santander, “refiere tanto a los logros de los nuevos actores en la industria espacial, como a los desarrollos tecnológicos que han permitido la llamada

democratización del espacio”. Otros actores, como la Fundación Embajada Abierta, hablan más bien de una «astropolítica», en donde no todo sería competencia amistosa y cooperación altruista, sino más bien agregación de intereses en bloques de países que impulsan programas y misiones espaciales para su propio beneficio.

A pesar de que el entorno parecería menos hostil que durante la Guerra Fría, los antecedentes de la región en materia espacial son más bien una colección de ausencias y tenues parpadeos, como una noche sin estrellas. Durante décadas, los hitos espaciales de los países latinoamericanos resultaron escuetos. En el mejor de los casos fueron convidados por algunas de las potencias concurrentes del siglo pasado. El primer latinoamericano en ir al espacio lo hizo en 1958, solo un año después de que la sonda soviética Sputnik 1, primer satélite artificial

en ir al espacio, lo hiciera. Se trató del cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez, quien viajó en una sonda soviética, dada la cercanía entre la URSS y el régimen revolucionario de Cuba. Hasta finales de la década de los setentas del siglo pasado no hubo mayores novedades.

Avanzada la carrera espacial y con nuevos actores en la escena internacional, llegaron nuevos hitos espaciales para la región. El año 1985 se volvió icónico ya que fueron lanzados los primeros satélites “latinoamericanos”: el brasileño BrasilSat A1 y el mexicano Morelos-1. El primero, desarrollado por la estatal brasileña Embratel con apoyo de la empresa canadiense SPAR y lanzado con apoyo del programa espacial francés. El segundo, desarrollado por la empresa estadounidense Hughes y lanzado por la Administración Nacional Espacial y Aeronáutica de Estados Unidos (NASA). Ese mismo año, el astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela viajó en la misión STS-61 de la NASA, convirtiéndose en el segundo latinoamericano en ir al espacio.

Argentina y Brasil mostraron que una estrategia de desarrollo tecnológico endógena, apalancada por una cooperación internacional diversificada, puede mitigar las brechas existentes y permitir que otros países participen de la nueva etapa de exploración espacial

México y Cuba se habían vinculado de un modo subordinado a las actividades espaciales de otros países. Pero Brasil, por su parte, había desplegado una estrategia más autónoma, combinando el desarrollo de capacidades nacionales con la construcción de alianzas con países que no eran ni los Estados Unidos ni la URSS. Aunque sin grandes epopeyas, esta estrategia sentó las bases del programa espacial más robusto con que cuenta la región a la fecha. Durante la década de los 90 no pasó mucho más, y no fue sino hasta inicios de los 2000 que nuevos países se sumaron de a poco al ámbito espacial, abriendo oficinas especializadas o auspiciando el lanzamiento de objetos espaciales (satélites).

En general, los satélites latinoamericanos son de tamaño reducido y de limitadas capacidades técnicas. Esto es una constante en la región, a excepción de Brasil, que siguió con su apuesta, y más tardíamente de Argentina, que consolidó un *clúster* de producción satelital –con hitos como ARSAT y SAOCOM– con alto valor agregado nacional e

inversión pública, que provee de servicios de telecomunicaciones al país. Argentina y Brasil mostraron que una estrategia de desarrollo tecnológico endógena, apalancada por una cooperación internacional diversificada, puede mitigar las brechas existentes y permitir que otros países participen de la nueva etapa de exploración espacial. Si dos países pudieron hacerlo, para la región en su conjunto debería ser aún más sencillo, ¿no?

A PRUEBA DE TURBULENCIAS: CELAC CONTINÚA

La integración regional es uno de los grandes pendientes. América Latina y el Caribe acumulan una cantidad importante de mecanismos de integración, aunque ninguno ha podido consolidarse del todo. CELAC, sin embargo, implica no solo un nuevo intento, sino una propuesta sin parangón para la región. Creada en 2010 en México e instalada en 2011 en Venezuela, la CELAC se constituyó en el foro regional más amplio –geográfica y políticamente hablando– y también en el más importante. Logró aglutinar en su convocatoria a los 33 países de Centroamérica, Sudamérica y a la mayoría de naciones del Caribe. A pesar de haber sido creada en plena década “dorada” del progresismo en Sudamérica, la iniciativa fue apoyada incluso por gobiernos conservadores de la región. Tal es así que una de sus postales más célebres fue el traspaso de la Presidencia Pro Témpore (PPT) del conservador Sebastián Piñera de Chile al líder cubano Raúl Castro.



Una de las virtudes de CELAC es que permitió, desde su mecanismo de gobernanza, la representación de las diversas subregiones, pero también la continuidad de los procesos y actividades decididas en sus diferentes instancias. A ello, debe sumarse que las decisiones en CELAC se toman por consenso, lo cual garantiza la legitimidad de las decisiones, aunque esto pueda resultar algo difícil de conseguir.

Pocas son las iniciativas de integración latinoamericana que han logrado cumplir sus objetivos, pasados los primeros bríos de una diplomacia presidencial que suele dar origen a nuevas instituciones regionales

A pesar de que una de las motivaciones de su creación fue reducir la centralidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) –orientada por Estados Unidos– la CELAC logró motorizar varios mecanismos institucionalizados de diálogo intrarregional con organizaciones como la mencionada CARICOM y con la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL); y, a nivel interregional, con la Unión Europea (UE) y con China.

Luego de celebrar varias cumbres de jefes y jefas de Estado, reuniones de cancilleres y cumbres empresariales durante casi 8 años, la CELAC experimentó horas bajas a partir de 2018. Para ese año, el mapa político de la región había cambiado de color en muchos países. Ni El Salvador, ni Bolivia, que ejercieron las PPT en 2018 y 2019 respectivamente, convocaron la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, ni la reunión de Cancilleres y Ministros de Relaciones Exteriores de CELAC. Menos aún los mecanismos de diálogo interregionales. Más grave aún: en 2019 el Brasil de Jair Mesías Bolsonaro anunció su retiro del organismo.

Con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018, México realizó un importante giro, sobre todo simbólico, pero también político, en su relación con América Latina. Una de sus apuestas en política internacional fue la reactivación de CELAC, cuestión lograda con la II Cumbre celebrada el 8 de enero de 2020 en Ciudad de México, aun sin el apoyo de Bolivia (PPT de 2019), que por entonces ostentaba un gobierno de facto. Así, el 2020 se convirtió en un año icónico para CELAC: no solo se reinstaló, sino que lo hizo en el país que la vio nacer y que ejercería la conducción en el siguiente período.

LA ALCE: ¿UNA APUESTA SIN PRECEDENTES?

Pocas son las iniciativas de integración latinoamericana que han logrado cumplir sus objetivos, pasados los primeros bríos de una diplomacia presidencial que suele dar origen a nuevas instituciones regionales. A consecuencia de esto, resultan escasos los antecedentes de instituciones científico-tecnológicas de la región. En el sistema interamericano, nucleado en torno de la OEA, existen instituciones de larga data, de naturaleza científica y tecnológica, que han persistido a pesar de los cambios de gobiernos en la región.

Distinta suerte corrieron las instituciones adscritas a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Desde este espacio se puso en marcha un mecanismo de gobernanza sanitaria regional, el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS-UNASUR), enfocado en la salud pública y en la gestión de riesgos a escala regional. Se impulsó también la Escuela Suramericana de Defensa, que incluso albergaba a varios proyectos tecnológicos de relevancia. A diferencia de las instituciones panamericanas, las instituciones nucleadas en la UNASUR desaparecieron en 2019, a tono con un nuevo momento político regional de hegemonía conservadora.

Estos eran los principales antecedentes con los que México, próximo a asumir la PPT de CELAC en 2020, delineó un plan de trabajo cuyo primer punto fue la cooperación aeroespacial y aeronáutica con dos objetivos claros: 1) “la vinculación de las agencias aeroespaciales de los países de CELAC para fomentar la cooperación tecnológica y científica” y, 2) “fomentar la cooperación en materia de capacitación y transferencia de aplicaciones y tecnología”. Con retrasos debidos a la pandemia por el COVID-19, el primer hito de este plan se concretó en julio de 2020 con la celebración del Encuentro Latinoamericano y Caribeño del Espacio, con el apoyo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).

Tres meses después, en octubre de 2020, los cancilleres de México, Marcelo Ebrard, y de Argentina, Felipe Solá, anunciaron un acuerdo bilateral para la constitución de un “Mecanismo Regional de Cooperación en el Ámbito Espacial”, sentando las bases para la constitución de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). La cancillería mexicana se abanderó del proceso y nombró un embajador especial para ALCE: el experimentado diplomático Gustavo Cabrera Rodríguez. El despliegue buscaba entonces recuperar el tiempo perdido por la pandemia e incluir, lo más pronto posible, a más países en la iniciativa.

Para noviembre de 2020, 18 países de la región suscribieron la Declaración Conjunta para la Creación de la Agencia Espacial Latinoamericana y Caribeña del Espacio, documento que reúne los primeros apoyos para ALCE e inicia los procesos de adhesión formal de varios países. A finales de 2020 los países miembros de CELAC renovaron para el 2021 la PPT de México, en gran medida por su impulso a la iniciativa para dotar de vacunas contra el COVID-19 a la región. Para septiembre de 2021, los 18 países que firmaron la declaración conjunta, oficializaron la suscripción del Convenio Constitutivo de ALCE, en el marco de la VI Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC, celebrada en Ciudad de México y presidida por López Obrador.

En 2022, la PPT de CELAC fue transferida a la República Argentina, cuya principal tarea sería sumar nuevas adhesiones, pero sobre todo lograr las ratificaciones de los congresos de cada país y receptor las respectivas comunicaciones diplomáticas de los países adherentes. A lo largo de 2022 se concretaron las adhesiones de República Dominicana, Belice y El Salvador.

Para diciembre de 2022, ALCE tenía ya la adhesión de 21 de los 32 gobiernos de los países que conformaban CELAC en ese entonces, aunque solo la ratificación parlamentaria y la comunicación diplomática de 7 de los 11 necesarios para concretar la creación de la personería jurídica específica de ALCE. En un escenario prometedor, pero incierto, otros 5 países están en fase de ratificación parlamentaria.

EL CAMINO SE HACE AL ANDAR: PRIMERAS INICIATIVAS DE ALCE

Una de las estrategias adoptadas por México para promover la ALCE y buscar nuevas adhesiones ha sido la de destinar recursos propios. Desde 2021 existe toda una apuesta diplomática que incluye el nombramiento de un embajador especial ante ALCE, que a su vez hace de embajador itinerante *de facto* de la agencia. Así, por ejemplo, Cabrera fue uno de los oradores centrales de la Conferencia Global sobre el Espacio para Países Emergentes (GLEC 2022), organizada por la Federación Astronáutica Internacional (IAF), celebrada a mediados de mayo de 2022 en Quito. Aquí no solo destacó los avances del proceso de constitución, sino que presentó a la ALCE al nivel de otras agencias espaciales ya consolidadas.

De igual modo, la creación de un Grupo de Seguimiento para crear la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (GSALCE), en diciembre de 2021, supone ir más allá de la retórica y avanzar en la institucionalización del espacio. El GSALCE se encarga no solo de dar seguimiento a los compromisos de los países que firmaron el Convenio Constitutivo en septiembre de 2021, sino también de iniciar los primeros proyectos científico tecnológicos de ALCE. El primero de los proyectos fue propuesto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México: el llamado Centro de Datos Geoespaciales para el Caribe busca poner en funcionamiento un ambicioso *data center* en la ciudad mexicana de Querétaro, para fomentar la transferencia de conocimientos en lo relativo al aprovechamiento de imágenes satelitales y generación de datos. Este proyecto cuenta con financiamiento público mexicano.

El segundo proyecto es la vinculación de países latinoamericanos y caribeños en las iniciativas de observación terrestre Galileo y Copernicus de la UE. Ambos proyectos poseen una importante red de satélites de distintas características y coordinan las capacidades de observación terrestre de los países europeos para generar datos, a los que se puede acceder de forma libre o paga según el caso. Este esfuerzo supone activar una línea de cooperación y financiamiento con la UE, uno de los posibles socios de CELAC en materia espacial. Existen otras iniciativas que aún no terminan de cuajar, pero que son claves para el funcionamiento futuro de ALCE. En julio de 2022, el canciller mexicano pidió al gobierno de Trinidad y Tobago que se sume a la ALCE, puesto que el país albergaría un centro de observación geoespacial, lo cual supone que ALCE no solamente se enfoque en las tecnologías de observación terrestre, sino también en la observación espacial, en ver las estrellas de cerca.

AD ASTRA PER ÁSPERA: A LAS ESTRELLAS POR EL CAMINO ÁSPERO

Hoy en día son más de 70 las agencias espaciales que existen alrededor del mundo. Sin embargo, no todos los países tienen capacidades comparables. De hecho, la brecha es enorme. En términos de financiamiento, 9 actores (8 países y la UE) invirtieron, cada uno, al menos 1.000 millones de dólares en sus programas espaciales durante 2020. Incluso son notables las diferencias dentro de este selecto grupo.

Hoy en día son más de 70 las agencias espaciales que existen alrededor del mundo. Sin embargo, no todos los países tienen capacidades comparables

Según el informe *Global Space Budgets de Space in Africa (2021)*, los cuatro países de nuestra región que más invierten en actividades espaciales son, en este orden, México, Brasil, Argentina y Bolivia. Entre los cuatro países invirtieron 164,75 millones en 2018, 170,3 en 2019 y 157,6 en 2020. En términos relativos, América Latina en su conjunto representa menos del 1 por ciento de la inversión en actividades espaciales realizada en los últimos tres años –niveles comparables solamente con los de África y Oceanía–. América del Norte, por su parte, representa más del 52% de los montos globales de inversión.

Más allá de las brechas de financiamiento, existen otras dimensiones

críticas en las actividades espaciales. En el ámbito de la institucionalidad, existe por ejemplo una enorme tarea. Una revisión breve de los 33 países que conforman la CELAC, muestra que sólo 12 de ellos tienen instituciones autónomas dedicadas al ámbito espacial y que otros dos realizan actividades espaciales, aunque sin contar con una institución particular. De suscribir el acuerdo constitutivo, las contrapartes nacionales recaerían muy seguramente en oficinas adjuntas a la presidencia, al ministerio de defensa y en el mejor de los casos a la cartera de telecomunicaciones. Ello deja expuesta la cooperación espacial regional a la voluntad de los mandatarios y gabinetes de turno, o subordinada a una fuerte orientación en torno a la seguridad y defensa.

El desarrollo de la institucionalidad, cabe decir, no está exenta de tensiones políticas al interior de los países. En Perú, Ecuador y Colombia, por ejemplo, las actividades espaciales se llevan adelante desde instituciones dirigidas por fuerzas armadas. Es decir que están constreñidas a actividades de vigilancia del territorio y gestión de información para la seguridad y defensa nacional, orientando los limitados recursos existentes a tecnologías y actividades típicamente “cerradas” o “reservadas”.

Con estas consideraciones, el gran reto para la PPT de San Vicente y las Granadinas, primer país caribeño que ejerce la conducción de la CELAC, es sumar a Brasil y lograr la ratificación de los congresos y la comunicación diplomática de más países sudamericanos. Hasta el momento ni Colombia, ni Chile, ni Uruguay, ni Brasil han adherido

ALCE podría constituirse en un pilar de la autonomía tecnológica de la región, si contribuye no solo a mitigar las brechas de conocimientos y tecnologías, sino también de *know how* institucional

al convenio. Estos países reúnen el 60% de la capacidad satelital de la región, es decir, 87 de los 144 objetos espaciales registrados en la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de Naciones Unidas (UNOOSA) por algún país latinoamericano o caribeño. De los países que han ratificado el convenio constitutivo, solo México, Argentina y Venezuela tienen presencia espacial, que sumada alcanza el 30% del total regional.

Una de las grandes preguntas, aún por resolver, es la posición que adoptarán los flamantes gobiernos progresistas de la región. Bolivia avanza con su proceso parlamentario, pero ni Gabriel Boric (Chile), ni Gustavo Petro (Colombia), ni Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) han dado señales de querer fortalecer ALCE. Petro evitó incluso responder una declaración de López Obrador sobre la materia en un encuentro bilateral celebrado a inicios de 2023. El caso de Brasil es sencillamente decisivo, no solo por sus robustos vínculos con otros programas espaciales, sino también por sus propias capacidades tecnológicas, ya que posee tecnología de propulsión, la mayor cantidad de satélites de la región, y a que habilitó recientemente un puerto espacial en Alcântara.

En base a lo expuesto anteriormente podemos plantear la existencia de cuatro escenarios posibles para ALCE y, en general, para el programa espacial de América Latina y el Caribe:

1. Irrelevancia y prolongación de la dependencia. Este escenario supondría que ALCE se vea limitada tempranamente, al no lograr implementar sus proyectos, debido en gran parte a que la mayoría de países no puedan participar por falta de capacidades. Esta falta no podrá mitigarse si no existen voluntades y recursos para realizar transferencia tecnológica y capacitación profesional entre los países de la región, necesarias para que los proyectos de creación y uso de tecnologías y datos desputen.

2. Corporativización, privatización, securitización y dependencia tecnológica. Para que ALCE se convierta en un proyecto democratizador para la región, sus intervenciones deben enfocarse en la generación de valor agregado asimilable por diferentes sectores económicos y actores sociales. Si no se garantiza aquello, actores con un capital político propio, como militares, empresarios o élites científicas, podrán dirigir la agencia, capturando sus decisiones y evitando la

producción de tecnología propia en favor de compras públicas a empresas transnacionales. ALCE podría terminar subsidiando los negocios espaciales del norte global.

3. Integración subordinada, extractivismo de datos y dependencia tecnológica. En el caso de que ALCE resulte gobernada por élites científicas o burocracias, especialmente del sector de las telecomunicaciones, la agencia podría convertirse en un enclave de “excelencia” desconectado de la realidad regional. Si no se construyen acuerdos políticos y sociales amplios y estables, es posible que los recursos de ALCE terminen financiando actividades alineadas a agendas de investigación de otros países y que, a cambio de enriquecer las carreras personales de científicos de la región, se generen procesos extractivos de datos de recursos y personas que no contribuyan a atender las agendas de desarrollo de sus países de origen.

4. Integración simétrica y autonomía tecnológica. En el mejor de los escenarios, ALCE podría constituirse en un pilar de la autonomía tecnológica de la región, si contribuye no solo a mitigar las brechas de conocimientos y tecnologías, sino también de *know how* institucional. Si lograra apalancar los escasos recursos que los países de la región destinan al ámbito espacial, podría además ser el *clúster* público-privado más importante de la región. Aunque se puede “hacer camino al andar”, ALCE requiere necesariamente de una CELAC más fortalecida, con países que apuesten por la ciencia y la tecnología a largo plazo.

No basta con tener la voluntad de mirar las estrellas para alcanzarlas. El camino al espacio está lleno de dificultades, que requieren de recursos y acuerdos políticos de largo plazo para ser solventadas. La CELAC, como el foro regional más importante, debería jugar un rol clave en estos aspectos. Sin embargo, la incertidumbre sobre la posición de varios gobiernos que, en principio, deberían ser proclives a fortalecer mecanismos de integración regional y partidarios de una mayor autonomía tecnológica para la región, puede convertirse en la mayor limitante de la ALCE. Si, a decir de Anne Johnson, México supo estar durante décadas “tan lejos de Dios y tan cerca de la NASA”, hoy Brasil parece estar “tan lejos de ALCE y tan cerca de compañías privadas como Virgin Orbit”.

BIBLIOGRAFÍA

Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (2021). Convenio constitutivo. Correspondencia diplomática.

Arreola Santander, Mario (2022). “Prólogo”. En: López Velarde Sandoval y Arreola Santander (coords.) *La nueva era espacial. Cooperación y regulación*. Gallardo Ediciones: Ciudad de México.

Embajada Abierta (2022). “El Despegue de la Astropolítica”. En línea: <https://www.embajadaabierta.org/post/el-despegue-de-la-astropol%C3%ADtica>

Johnson, Anne (2020). “A mexican conquest of space Cosmopolitanism, Cosmopolitics, and Cosmopoetics in the Mexican Space Industry”. *Review of International American Studies*, RIAS, Vol. 13, Fall, Winter Nº 2 /2020 DOI: <https://doi.org/10.31261/rias.9808>

Space in Africa (2021). *Global Space Budgets. A Country-level Analysis*. Lagos-Nigeria.



Máscaras guaraníes que usamos todos los días

¡Indios en la Argentina! Y hasta mestizos, “gringos” y “no indios” que se empeñan en “hablar como indios”. Desde Bartolomé Melià hasta la cumbia villera, desde la literatura canónica hasta las gestas independentistas, este ensayo nos lleva de la cotidianeidad a la extrañeza de una lengua antropofágica que se escribe en la piel de los sudamericanos y los argentinos.

Por **Mariano Dubin**

Bartolomé Melià fue, sin duda, uno de los intelectuales más originales de este continente. Incluso aunque haya nacido del otro lado del charco; en Porreres, en Mallorca, en 1932. Sacerdote y lingüista, fue, en verdad, un eslabón más del pensamiento jesuítico indoamericano, que desde sus inicios hizo de la experiencia americana una filosofía política nueva. Sería bueno no olvidar que tanto Fidel Castro como Gabriel García Márquez y otras grandes figuras intelectuales recibieron formación jesuita.

Melià hablaba decenas de lenguas: mallorquín, español, latín, griego, alemán, francés, portugués, italiano, inglés y, claro, distintas variedades

del guaraní –el jopará, el mbya, etcétera–. Desde mediados de la década del 50 estuvo en Paraguay, muchas veces en largas convivencias con las comunidades mbya y avá guaraní, aprendiendo no una lengua sino una experiencia de mundo. También, para entonces, colaboró con León Cadogan, el antropólogo paraguayo que escribiera uno de los libros esenciales de la literatura latinoamericana: «Ayvu rapyta. Textos míticos de los mbyá-guaraní del guairá» (1959).

Melià murió en el año 2019 con una visión sumamente trágica de la destrucción ecológica, la desregulación capitalista y el futuro de la identidad guaraní. En una de las mejores





entrevistas que se le ha hecho (y una de las últimas), realizada por Carla Benisz y Mario Castells bajo el nombre «La lengua también es piel» (2019), leemos que: “la sojización no sólo es una agresión ecológica sino también social. Esa agresión cultural va unida al mismo cultivo. Quiero decir que la soja no se puede hacer en lotes de 10 hectáreas. Requiere de una concentración mayor de tierras y va contra las personas. Donde hay soja no hay personas. Así como en un campo de soja no vas a ver un tatú o un gua’a. Y el guyra kampána, ese sí ya se murió [empieza otra vez a quebrarse la voz]. Cinco kilómetros antes de llegar a los campos de soja...”.

Mientras parte de nuestros intelectuales y académicos hacen parte del dispositivo de la dominación neocolonial, el mallorquín Melià fue un pensador y defensor de la cultura guaraní, el campesinado paraguayo y los pueblos indígenas

Mientras parte de nuestros intelectuales y académicos hacen parte del dispositivo de la dominación neocolonial –y, por ende, desprecian con orgullo la *barbarie nativa*–, el mallorquín Melià fue un pensador y defensor de la cultura guaraní, el campesinado paraguayo y los pueblos indígenas. En «Mundo Guaraní» (2011) afirmó que el “Paraguay, como nación, descende en parte de los Guaraníes, pero los pasos del sendero están casi enteramente borrados”. La idea de *un sendero con los pasos casi enteramente borrados*

es una imagen certera de las paradojas y los desencuentros entre las culturas nacionales y las culturas indígenas ya no sólo de Paraguay sino de toda América Latina y el Caribe. Nuestra cultura mestiza, con cuero y espíritu indígena, ha poseído múltiples reacciones a su pasado originario, entre ellas, claro, el rechazo y la persecución.

En otro libro memorable, «La lengua guaraní del Paraguay» (1992), cifra la lengua en el rito de un *canto largo*: “a la manera de un ritual indígena –como aquellos en que he podido participar frecuentemente en las aldeas de los guaraníes– veo el desarrollo de esta lengua como un canto largo, *mborahéi puku*, en el que cada estancia configura una etapa histórica o refleja un estilo de vida. Es el canto en que voces antiguas se abren a voces nuevas”.

No es sólo la lengua guaraní; digamos que la experiencia indígena prolifera en Sudamérica. El Gauchito Gil, santo correntino de facón e insignia federal; los mates cimarrones que nos permiten despertarnos bien temprano a la mañana; el chamamé y la polka que cruzan las fronteras de Paraguay y Argentina; los animales que sólo sabemos nombrar en sus lenguas: yagareté, yacaré, aguará guasú, chajá, piraña, carpincho. Es el San Martín y el Artigas que hablaban en guaraní. Es el poeta brasileño Oswald de Andrade quien preguntó, en el año 1928, en su «Manifiesto Antropófago»: “*Tupi or not Tupi: that is the question*”.

Tal vez esta indagación podría estar mal encarada si se pensara que aquello *tupí* o *guaraní* debe ser inventado: recuperado de un origen lejano y perdido para siempre. Por

el contrario, formulemos una forma de *antropofagia cotidiana*: todo aquello donde lo guaraní está vivo en nuestras vidas comiéndonos por dentro. Es decir, las máscaras guaraníes que usamos todos los días.

TUPÍ OR NOT TUPÍ: THAT IS THE QUESTION

Darcy Ribeiro, en «El pueblo brasileño» (1995), afirmó que el “Brasil es la última y dolorosa realización del pueblo tupí” y que “rotos y transfigurados llegamos a ser lo que somos”. Esta idea de una matriz tupí-guaraní que estructura vastas regiones sudamericanas es la excusa para hablar no de lo indígena en su *otredad radical* (idea tan cara en el mercado neoliberal de las identidades) sino en el nosotros americanos.

Veamos la extensión guaraní, primero, en la literatura y cultura argentina. Sólo para nombrar unas pocas cosas que están a la vista de todos: los cuentos de Horacio Quiroga mixturados en la lengua y la cultura guaraní –por ejemplo, en «Los precursores», escrito en español pero con una sintaxis guaraníca (“los que hemos gateado hablando guaraní, ninguno de esos nunca no podemos olvidarlo del todo”) o sus diversos cuentos donde recupera la cosmología criolla litoraleña–. O los diálogos entre Jorge Luis Borges y Fanny, su empleada doméstica correntina por más de tres décadas, donde ella le explicaba palabras y frases en guaraní. O la letrística, no sólo en el chamamé sino, a su vez, en la banda de cumbia villera Damas Gratis, por ejemplo, en «Chica bandida» –recordemos que el cantante Pablo Lescano se crió con un abuelo que le transmitió la lengua indígena–, orgullo

Esta idea de una matriz tupí-guaraní que estructura vastas regiones sudamericanas es la excusa para hablar no de lo indígena en su otredad radical (idea tan cara en el mercado neoliberal de las identidades) sino en el nosotros americanos

guaranítico que estampa en una remera que suele usar: *rohayhu pero che petei sarambikue*. Es el caso del mismo zorzal criollo, Carlos Gardel, que se animó en el año 1922 a cantar: *Iporá kuñatay / más linda que el urupey / te canta tu kuimba'e / ¡ay, sí / ¡en idioma guaraní!*

José de San Martín hablaba guaraní, acaso como lengua materna, mientras que José Artigas y Manuel Belgrano lo aprendieron en las guerras patrias; un héroe más reciente, Diego Armando Maradona, fue hijo de *yacaré correntino*: “Don Diego”. El guaraní se lee también en «El río oscuro» (1943) de Alfredo Varela, y se escucha en su monumental adaptación «Las aguas bajan turbias» (1952) de Hugo del Carril; en otro tipo de cine, la Coca Sarli, bajo la dirección de Armando Bó, hizo varias películas ambientadas en tierras guaraníes; la proliferación de documentos públicos durante la Colonia y la etapa revolucionaria (recordemos las cartas y proclamas de Belgrano). Y recuperemos, por último, uno de los grandes olvidados de nuestra historia: Andresito Guasurarí, indio guaraní, gobernador de Misiones entre 1815 y 1819. Como el mate diario, que tomamos

todos los rioplatenses, la vitalidad guaraní circula sin conciencia de su matriz indígena.

En fin, no se trata de la enumeración heteróclita sino de sortear la idea de *minoridad* construida desde el discurso académico progresista. Un *blanqueamiento cultural* fundado en el exotismo. Aquel que organiza un *nosotros, los blancos y ellos, los indios*. Sobre todo porque no se puede hablar de un hecho aislado o menor, por ejemplo, respecto a una lengua que es hablada por cerca de diez millones de personas; un millón de estos hablantes, al menos, viven en Argentina (principalmente en la zona de Buenos Aires y las provincias del Nordeste). Relevancia que se traduce en su *extensión*, ya que es hablada en gran parte de Sudamérica (sobre todo en Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil).

En este territorio de millones de kilómetros cuadrados, cada lugar es un caso singular de la vida de la lengua. En otras zonas de Argentina, como donde vivo, consideradas de irrelevante presencia guaraní –al menos en comparación con Corrientes, Paraguay o el Mato Grosso– el mapeo de la lengua no

deja de multiplicarse: se utiliza asiduamente en distintos eventos de la comunidad paraguaya; se dictan talleres de enseñanza en espacios formales y no formales; existen decenas de radios FM donde la lengua predominante es el guaraní; distintos oficios religiosos se realizan en este idioma en parroquias y cate-drales; en distintas bailantas la música en vivo es en guaraní. Y, sobre todo, es una lengua que en algunos barrios se escucha constantemente, tanto en la cocina familiar como en el almacén, la esquina y la escuela.

Una breve anécdota ilustra esta vitalidad. Un día, cruzando una plaza céntrica de mi ciudad, descubrí a un grupo de testigos de Jehová haciendo circular su revista religiosa en guaraní: *Ñemañaha*. Estaban hablando con una pareja de paraguayos que, justo en el momento que comencé a escuchar la conversación, se despedían apurados de los insistentes religiosos. El testigo que encabezaba el grupo era un joven rubio, entrampado en una camisa inmaculada y con zapatos lustrados de modo impecable. Era

PEQUEÑOS RETAZOS DEL MUNDO GUARANÍ

Nuestras ciudades son, en verdad, sólo un pequeño retazo de un inmenso continente donde ya los nombres de las ciudades, los ríos y las montañas nos indican la presencia de las lenguas tupí-guaraníes: Ipanema, Ituzaingó, Iberá, Uruguay, Iguazú, Itaipú, Ipiranga, Curuzú Cuatiá, Paraná, Paysandú, Tacuarembó, Caacupé, Paraguay y un sinfín de etcéteras.

Sólo en Argentina se hablan distintas variedades del guaraní (en el continente el tronco tupí-guaraní suma decenas de lenguas): el ava guaraní en las provincias de Salta y Jujuy; el mbya guaraní en la provincia de Misiones; y el guaraní criollo o jopará hablado en las provincias del noreste del país y, asimismo, en Buenos Aires y Gran Buenos Aires a causa de dos grandes movimientos migratorios. El primero que comenzó hacia la década de 1930 realizado por correntinos, chaqueños y formoseños; el segundo, en las últimas décadas, caracterizado por migraciones paraguayas. A su vez, dentro del jopará existen las variedades del correntino y del paraguayo que no responden a las fronteras actuales de ambos países, ya que el jopará hablado en Formosa, por ejemplo, responde a la variante paraguaya.

Pero volvamos a la zona de Buenos Aires, donde se supone que hay una menor presencia del guaraní. Una idea de “lengua reciente”; “recién venida” desde “otros lados”. Pero sólo considerando la migración correntina y paraguaya estamos hablando de una presencia de cien años en la zona. Pero es, en realidad, mucho más antigua. De hecho, ha sido hablada en esta ciudad antes

de que existiera la Argentina como nación o inclusive como *proyecto de nación*: la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires encabezada por Juan de Garay, en el año 1580, fue realizada por criollos e indios que hablaban como lengua materna (y muchos de ellos como única lengua) el guaraní. Es decir, fue su *primera lengua* junto al español y, desde entonces, con mayor o menor intensidad es hablada en la ciudad.

Si en la fundación de Buenos Aires se habló guaraní, y actualmente se habla guaraní, el primer desplazamiento epistemológico que deberíamos proponer es por qué no hemos escuchado aún una lengua que estuvo resonando, desde hace siglos, acá y allá, en el bullicio de sus calles. Acaso precisamos *otra fundación mítica* de Buenos Aires que nos permita ver *más acá* de aquello de “las proas vinieron a fundarme la patria”.

La sorpresa, desde ya, evidencia una supremacía de clase en tono de “¡hay indios en mi país!”. Esta incredulidad no deja de expresarse, muchas veces, en formas brutales y bizarras. La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en su libro de memorias «Sinceramente» (2019) describe un encuentro singular, en el año 2015, entre el entonces ministro de transporte del presidente Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, y el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán. El ministro Dietrich, según el libro, se habría asombrado de que el gobernador de una provincia “como Formosa” fuera *blanco*: “ah, pero usted tiene los ojos celestes”. A lo que Gildo Insfrán le respondió: “tengo los ojos celestes y hablo guaraní”. *¡Un gobernador puede hablar guaraní!*, parece ser la cifra oculta de la mirada anclada en la ciudad de Buenos Aires.

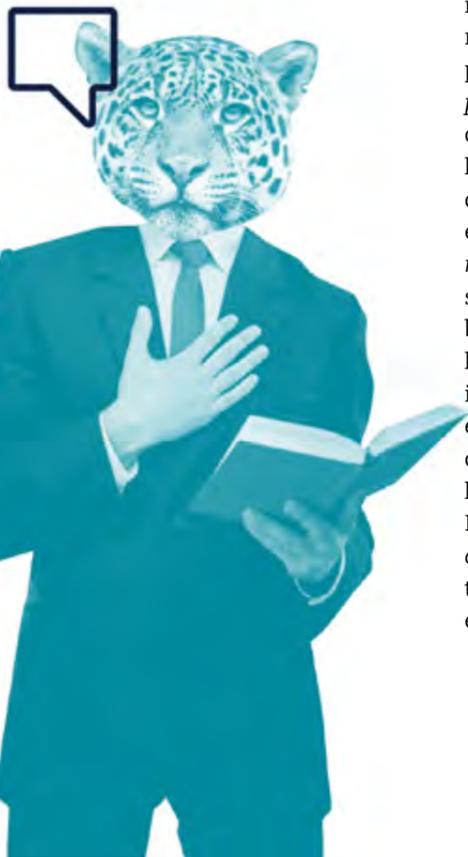
EL GUARANÍ PROHIBIDO

El guaraní es acechado. La lengua se prohíbe y esta prohibición se interioriza en una dualidad bestial de incertidumbres: como Macunaíma, el protagonista de la novela homónima de Mário de Andrade, el sueño es cruzar el río que separa de la ciudad y convertirse en blanco. Lo hemos escuchado: desde que Marta fue a Buenos Aires “está *más blanca*”. No vuelvo al pueblo porque allá “siguen siendo todos *muy indios*”. Lo hemos escuchado, una y otra vez, en Buenos Aires, en Quilmes, en Corrientes, en Posadas; pero también en Caaguazú y Asunción. Los mismos hablantes lo dicen: hablar guaraní es cosa de *mboriahu* –o *poriahu*, en su pronunciación correntina–, es decir, de “pobre”.

La imposibilidad de escuchar el guaraní es un efecto de sus prohibiciones. Y ahora no me refiero a la omisión, más o menos general, en el sistema escolar del derecho de alfabetizarse y aprender en la lengua materna. Estamos hablando de no hablar el guaraní sino a efecto de persecuciones y castigos (más allá, digamos, de la propia devaluación de la lengua en la economía de los intercambios lingüísticos).

Nuestras ciudades son, en verdad, sólo un pequeño retazo de un inmenso continente donde ya los nombres de las ciudades, los ríos y las montañas nos indican la presencia de las lenguas tupí-guaraníes

norteamericano. Supuse que el guaraní del *yankee* sería, como mínimo, precario. Lo encaré con un *mba'e la porte, chamigo?* Un modo coloquial de decir “hola” (o mejor: “¿cómo está la cosa?”). Preferí este registro al tradicional *mba'eichapa reiko* (“¿cómo estás?”) o al formal y escolarizado *maitei* (“hola”). Para mi sorpresa no sólo el predicador callejero hablaba el guaraní sino que lo hacía a la perfección; palabra tras palabra iba engordando una sola, inmensa e interminable palabra aglutinada que cuando yo intentaba traducir, ya había saltado a otra y a otra y a otra. Me escapé preguntándole con un *cuánto piko cuesta* la revista. El norteamericano, contra todo prejuicio, era un hablante notable del guaraní.



ESTA PROHIBIDO
HABLAR EN GUARANI
EN EL DEPOSITO.

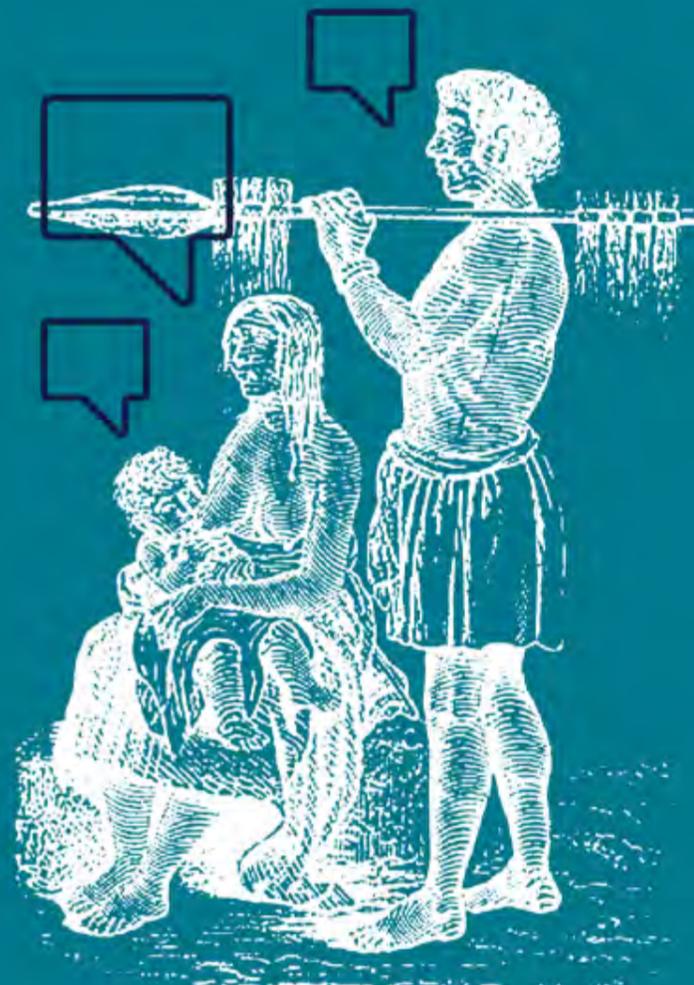
SOLO
ESPAÑOL

Los ejemplos, lamentablemente, abundan. En el año 2017, la empresa de ómnibus de la línea 151, de la ciudad de Buenos Aires, prohibió a sus empleados hablar en guaraní. En aquel momento se viralizó una imagen del depósito donde un cartel indicaba taxativamente: “Está prohibido hablar guaraní en el depósito. Sólo español”. Se subrayaba, en el cartel, el “sólo español”. No es, por cierto, la única prohibición explícita. Recupero otros dos casos más: en el año 2011 en un penal de mujeres de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, se les prohibió su uso a las reclusas –en contra de toda regulación legal–. Más recientemente, a las empleadas domésticas de los barrios cerrados de Nordelta (una de las zonas más ricas de Argentina), se les prohibió usar los mismos ómnibus que sus patrones. Los argumentos esgrimidos, que fueron publicados en diversos medios nacionales, expresaban tópicos racistas muy antiguos que ya se cifraron en las crónicas coloniales: el “mal olor”, la “falta de costumbres”, el “masticar ruidoso”. Los patrones se justificaban, además, en “la incomodidad” de escuchar a sus mucamas hablar en un idioma indígena.

Los “chicos de los *countries*” reproducían en sus primeros balbuceos lo que definiríamos, con certidumbre, como *lengua materna*. Un fenómeno parecido al que la antropóloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui (2010) llamaría el “síndrome del aguayo”

Estas prohibiciones podrían pensarse como más factibles en zonas como Buenos Aires, donde se espera encontrar una cantidad menor de hablantes. Sin embargo, incluso en Paraguay, centro de la cultura guaraní, esta persecución existe. La colonización de la soja y el avance de los *fazendeiros* sobre antiguos territorios campesinos, el expolio cotidiano, también se han reforzado en la prohibición de hablar guaraní dentro del latifundio. Así sucedió, por ejemplo, en Guayaibí, en San Pedro, donde la administradora de una estancia sojera advertía a sus empleados en un mensaje: “A partir de hoy está prohibido hablar guaraní en la estancia, prohibido, ¿me escucharon? Así, que si vamos a hablar, usamos el portugués o el español que es idioma de acá del Paraguay”.

Prohibiciones que acechan a los hablantes, día a día, en procura del triunfo civilizatorio. Sin embargo, casi en un modo de *antropofagia contemporánea*, el guaraní en sus rituales de caza sobrevive, inclusive, en la *piel del otro*: aquel que acecha al guaraní, desde épocas coloniales, es devorado por este mundo salvaje. Acaso fueron algunas de las conclusiones posibles de una investigación trunca por la pandemia: en el año 2019 procuré reconstruir, en terreno, la prohibición del guaraní en los barrios cerrados de Nordelta. Encontramos allí, otra vez, la lengua en sus mudanzas imposibles, en la incertidumbre de su estado de excepción continuo. Porque si lo previsible era hablar el guaraní con las empleadas domésticas, lo acabamos encontrando donde no lo esperábamos.



En una entrevista con una fonológa que atendía a niños de la zona (“los chicos de los *countries*” –de los barrios cerrados– como ella los llamó), ella comentó sobre un *suceso extraño*. Muchas madres habían estado enviando a sus hijos al consultorio “por un hablar raro”. Esta “extrañeza fonológica” no provenía de un síndrome repentino. Era a causa del tiempo de cuidado de los niños por parte de sus empleadas domésticas, ya que ellas les hablaban, les cantaban, les susurraban –en fin, les daban amor– en guaraní. Los “chicos de los *countries*” reproducían en sus primeros balbuceos lo que definiríamos, con certidumbre, como *lengua materna*. Un fenómeno parecido al que la antropóloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui (2010) llamaría el “síndrome del aguayo”, para explicar la dualidad de niños de clases altas que son criados por mujeres indígenas.

A pesar de todo, el guaraní se sigue hablando. Acaso como temió (y acaso presagió) Jorge Luis Borges en «El otro» (1975): “Cada día que pasa nuestro país es más provinciano. Más provinciano y más engreído, como si cerrara los ojos. No me sorprendería que la enseñanza del latín fuera reemplazada por la del guaraní”. El guaraní, tras comerse la lengua de otros sudamericanos, se come también la lengua de los argentinos. ✂

En este número

Lucía Alvites (Perú)

Magíster en Estudios de Género y Cultura en América Latina por la Universidad de Chile. Socióloga y docente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Militante política y social.

Fabio Luis Barbosa Dos Santos (Brasil)

Historiador y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo. Co-autor de «Brasil autofágico. Aceleración y contención entre Bolsonaro y Lula» (Tinta Limón Ediciones).

Federico Barreña (Argentina)

Reportero gráfico en distintos medios internacionales. Desarrolló un proyecto periodístico independiente en Haití en el año 2010.

Matías Bosch Carcuro (Cuba - República Dominicana)

Director del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad APEC de República Dominicana.

Elvin Calcaño Ortiz (República Dominicana)

Politólogo. Máster en Teoría Política por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Noam Chomsky (Estados Unidos)

Lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Profesor Emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Autor de decenas de libros sobre política, geopolítica y lingüística.

Mariano Dubin (Argentina)

Escritor. Docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Pedagógica Nacional.

Publicó «Parte de guerra. Indios, gauchos y villeros: ficciones del origen» (EME).

Juan Manuel Erazo (Argentina)

Periodista, ensayista y militante popular. Estudió Historia en la Universidad de Buenos Aires y Derecho en la Universidad Nacional de La Matanza.

Giordana García Sojo (Venezuela)

Licenciada en Letras por la Universidad de Los Andes (ULA). Fue viceministra de Cultura de la República Bolivariana de Venezuela (2014-2016) y presidenta de la Fundación editorial El perro y la rana (2013-2017).

Vijay Prashad (India)

Historiador y periodista. Director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Editor de LeftWord Books. Miembro no residente del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China.

Héctor Testa Ferreira (Chile)

Abogado y Magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile. Autor de numerosas publicaciones sobre actualidad chilena y política internacional. Fue asesor en la Convención Constitucional (2021-2022).

Gabriel Vera Lopes (Argentina)

Editor en ALAI. Corresponsal de Brasil de Fato en La Habana, Cuba. Colabora con espacios de formación política de diferentes movimientos sociales.

Daniel Vizquete-Sandoval (Ecuador)

Ingeniero en Biotecnología y Magíster en Sociología Política (FLACSO-Ecuador). Investiga sobre políticas científicas, espacio exterior, tecnologías emergentes, plataformas digitales y conocimiento abierto.

DEMOCRACIA EXPUESTA: ENSAYO DE INTERPRETACIÓN P.7 ● LA DERECHA Y SUS ENEMIGOS IMAGINARIOS P.9
BRASIL AUTOFÁGICO, POR BARBOSA DOS SANTOS P.17 ● BUKELE, LA LEY DE LA EXCEPCIÓN P.25 ● PERÚ: CRISIS SOBRE CRISIS P.31 ● EL CHILE QUE NO FUE P.38 ● HAITÍ: ENSAYO FOTOGRÁFICO P.47 ● DE UCRANIA A CHINA, POR CHOMSKY Y PRASHAD P.55
MARYSE CONDÉ, UNA VOZ ANTILLANA P.63 ● ALCE, EL SUEÑO ESTELAR LATINOAMERICANO P.67 ● MÁSCARAS GUARANÍES P.77 ●

